INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS, PARAGUAY 2014

RESUMEN EJECUTIVO

Paraguay es una república constitucional multi-partidaria. En abril de 2013 Horacio Cartes del Partido Colorado, también conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR), ganó la presidencia en unas elecciones reconocidas como libres y justas. Las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.

Los principales problemas de derechos humanos fueron la impunidad en el sector judicial, junto con largas demoras de detención y prisión preventiva previo juicio; condiciones carcelarias duras y en ocasiones poniendo en riesgo la vida; y la participación de la policía en actividades criminales como homicidios dolosos cometidos por personas asociadas con la policía y los militares.

Otros problemas de derechos humanos incluyen el asesinato y la intimidación de periodistas por parte de grupos del crimen organizado; la corrupción, la discriminación y la violencia contra las mujeres y las personas indígenas, personas con discapacidad, y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT); y trata de personas. También hubo problemas a menudo con el trabajo infantil y violaciones de derechos de los trabajadores.

El gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero la impunidad general hacia el personal de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno fue frecuente.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Asociación Campesina Armada (ACA), un pequeño grupo armado que se separó del EPP durante el año, son movimientos guerrilleros que asesinaron a miembros de las fuerzas de seguridad y a civiles, han robado y secuestrado a no uniformados, pidiendo un rescate a cambio, robaron propiedad y reclutaron a niños para que participen en sus operaciones. Las autoridades investigaron los ataques del EPP y ACA, y enjuiciaron y condenaron a algunos miembros.

Sección 1. Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo la Libertad de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la vida

Hubo denuncias de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales.

El 18 de enero, Ángel Arias Cubilla fue secuestrado en San Juan Nepomuceno, Caazapá, según el relato de testigos que vieron su coche interceptado por otros dos

vehículos. Su cuerpo fue descubierto cinco días después atado a un árbol y con señales de tortura. Las autoridades arrestaron al oficial de policía Héctor Mendoza López y su hermano Rolando en relación con el homicidio. Los familiares de la víctima denunciaron que las autoridades locales trataron de encubrir el caso. La Oficina del Fiscal General ordenó la apertura de una investigación; el caso seguía pendiente al finalizar el año.

El 5 de septiembre, las fuerzas militares allanaron una casa en Kurusu de Hierro, Concepción, basado en informes de inteligencia de que en el lugar se estaban reuniendo miembros del EPP. El enfrentamiento que siguió condujo a la muerte de Marcos y Hermenegildo Ovelar y lesiones a María Gloria González, todos eran familiares del guerrillero del EPP, Noel Adalberto Ovelar. Los familiares denunciaron que el tiroteo no estaba justificado y que las armas y los uniformes que la policía recogió como evidencia fueron plantados. El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (NMPT) informó que un representante de la Oficina del Fiscal General, quien acompaña habitualmente a los militares en las operaciones, no estuvo presente durante la operación, tal como lo requiere la ley. La Fiscalía General inició una investigación; el caso estaba pendiente al finalizar el año.

Hubo informes de asesinatos de dirigentes campesinos. La organización no gubernamental (ONG) Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), que consta de 33 organizaciones no gubernamentales y organizaciones cívicas, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), y varias organizaciones no gubernamentales y asociaciones que abogan por la reforma agraria alegaron que propietarios rurales renegados que se oponen a los líderes campesinos ordenaron los asesinatos. Los medios de comunicación informaron que hubo fuentes que indicaron que el EPP, ACA, o traficantes de drogas locales podrían haber ordenado los asesinatos. La CODEHUPY alegó que entre 1989 y 2013, los terratenientes fueron responsables, en complicidad con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, de la muerte de 115 líderes campesinos y activistas de la reforma agraria. Según CODEHUPY, sólo ocho ejecutores fueron condenados por estas muertes, pero nadie fue condenado por la autoría moral de los asesinatos.

El 2 de febrero, el líder campesino Nery Benítez Galeano fue asesinado en Guayabi, San Pedro, después de participar en una protesta de cultivadores de soja contra la deforestación. El 12 de marzo, dos desconocidos mataron al activista de la reforma agraria Eusebio Torres en Ytakyry, Alto Paraná. Torres fue presidente de la comisión vecinal de Santa Lucía y facilitó el esfuerzo del gobierno para reubicar a los campesinos sin tierra en propiedad del gobierno que los productores de soja habían ocupado ilegalmente. El Ministerio Público inició las investigaciones; los casos estaban pendientes al finalizar el año.

Los procedimientos judiciales seguían pendientes contra 13 manifestantes acusados en el caso que involucra las muertes de seis policías en Curuguaty en el año 2012. El 12 de abril, el juez Benito Ramón González aprobó el arresto domiciliario para cinco

de los acusados después de que iniciaron una huelga de hambre que duró un mes. El 14 de abril, el fiscal general Javier Díaz Verón se reunió con familiares de las víctimas y miembros de la comunidad de derechos humanos y se comprometió a reunir un equipo para revisar el archivo de Curuguaty y buscar irregularidades. La CODEHUPY denunció que un manifestante de 17 años de edad, estaba siendo juzgado como adulto, a pesar de que de acuerdo a la ley debería haber sido acusado como menor de edad. La revisión del caso del Ministerio Público continuaba al finalizar el año.

Debido a que los disparos se produjeron después de que manifestantes invadieron la propiedad Marina Cue en Curuguaty, los acusados también enfrentan cargos por ocupación ilegal y allanamiento de morada. Los abogados del acusado solicitaron que el juicio se aplase hasta que la propiedad de la tierra se pueda determinar. El 23 de junio, un juez pospuso una audiencia de los manifestantes para el 17 de noviembre, y el caso seguía abierto a fin de año.

El 14 de junio, Amnistía Internacional emitió un comunicado pidiendo una investigación independiente e imparcial sobre el incidente de Curuguaty y que la Fiscalía investigue la responsabilidad y las acciones de la policía implicados en la muerte de 11 ocupantes ilegales durante el incidente. El comunicado señaló que había denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por la policía - como la tortura, los malos tratos y detención arbitraria - y que el relato de testigos sugirió que algunos de los campesinos fueron asesinados en circunstancias sospechosas, después de que la violencia principal había disminuido.

Grupos guerrilleros armados siguieron matando a civiles y a agentes del gobierno. Durante el año, el EPP mató a cuatro civiles, ningún policía y tres militares. No hubo asesinatos reportados por miembros de la ACA.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos. Hubo informes de la prensa y gobierno de “secuestros express” de corto plazo para pedir rescate.

c. Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes

La ley prohíbe estas prácticas, y el gobierno generalmente respetó estas disposiciones. Hubo informes creíbles, sin embargo, de que algunos funcionarios del gobierno emplearon tales prácticas. La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió 10 casos de investigación de tortura durante el año. No hubo condenas, sin embargo, y las investigaciones estaban pendientes al finalizar el año. Las asociaciones de abogados alegaron que los abogados defensores, jueces y fiscales, a veces dilatan los casos durante cuatro años, hasta que son desestimados por razones de procedimiento. Las asociaciones de abogados alegaron que el presunto

estancamiento tiene que ver con la complicidad entre los acusados y fiscales corruptos, pero por ley los cargos de tortura no prescriben.

El 26 de septiembre, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas pidió al gobierno investigar y juzgar a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El informe observa que muy pocos presuntos autores fueron sancionados o procesados en los tribunales y que las investigaciones aún están pendientes.

El 30 de agosto, una asociación de víctimas de la tortura identificó a 18 agentes de policía a los que acusaban de ser responsable de la tortura y los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Stroessner. La asociación de víctimas presentó una demanda en Argentina y una denuncia contra Paraguay al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Tortura de las Naciones Unidas.

Condiciones en las Prisiones y Centros de Detención

Las condiciones en las penitenciarías y centros de detención continuaron estando por debajo de los estándares internacionales. Las condiciones eran duras y, a veces ponían en peligro la vida debido a la violencia hacia los reclusos, el maltrato, el hacinamiento, el personal mal entrenado, deterioro de la infraestructura y condiciones de vida insalubres.

Condiciones físicas: Según un informe del Ministerio de Justicia en marzo, 16 centros penitenciarios del país albergaban a 10.843 reclusos, 63 por ciento más que su capacidad de 6.637. La cárcel de Ciudad del Este, preparada para 450 reclusos, mantenía 1182, y la cárcel de Tacumbú, diseñada para mantener a 1.687 reclusos, albergaba a 2611. Las condiciones en Tacumbú, Ciudad del Este, y varias otras prisiones eran inadecuadas, había hacinamiento generalizado y condiciones de vida insalubres. En un esfuerzo por abordar esta situación, el gobierno dejó de enviar nuevos presos a los centros de Tacumbú y Ciudad del Este y trasladó a algunos prisioneros a cárceles menos concurridas. El ministerio informó que la población carcelaria incluyó 124 presos con enfermedad mental diagnosticada, 102 con tuberculosis y 44 con VIH. Sólo el Centro Penitenciario Padre Juan A. de la Vega, inaugurado en 2012, fue construido con controles de temperatura adecuados y ajustes razonables (tales como rampas) para los reclusos con discapacidad física. Los 15 centros penitenciarios restantes no tenían alojamiento adecuado para los reclusos con discapacidad física.

De los 10.843 reclusos, 2.704 de ellos (24,9 por ciento) habían sido condenados, mientras que 8.139 (75,1 por ciento) se encontraban en prisión preventiva. Los reos con prisión preventiva estaban junto a los presos con condena en todos los centros de detención salvo en Emboscada, Granja Ita Pora, y Granja Koe Pyahu. Las autoridades no separaron a los delincuentes no violentos de los violentos. Las mujeres representan el 7 por ciento de la población carcelaria total, con 776 reclusas en nueve

cárceles. De estas, 207 reclusas (27 por ciento) fueron condenadas y 569 (73 por ciento) estaban detenidas en prisión preventiva. Las condiciones de reclusión para los hombres y las mujeres eran comparables. La cárcel de mujeres en Asunción (una de las dos únicas en el país) tenía una capacidad de 200 personas, pero albergaba a 473 reclusas, según el informe del ministerio. Las autoridades permitieron que las madres lactantes vivan con sus hijos dentro de un área especial, separados del resto de la población carcelaria, en la prisión de mujeres Buen Pastor en Asunción. Se encontraron mujeres encarceladas junto con hombres en las penitenciarías en Encarnación, Misiones, Concepción, Coronel Oviedo, San Pedro, Villarica y Pedro Juan Caballero, a pesar de que por lo general se encuentran en pabellones separados.

La Dirección del Ministerio de Justicia para el cuidado de los condenados menores de edad asignó a los condenados por delitos menores a uno de los nueve centros correccionales juveniles en el país, uno de los cuales se dedica a las mujeres. Algunos delincuentes juveniles cumplían sus condenas en secciones separadas de las cárceles de adultos, específicamente en las de Encarnación y la penitenciaría de mujeres de Ciudad del Este. El ministerio informó que había aproximadamente 360 menores de edad encarcelados por hechos punibles, de los cuales el 10,5 por ciento fueron condenados y el resto seguía en prisión preventiva. El centro penitenciario juvenil en Itauguá alojaba 157 jóvenes en un centro diseñado para sostener a 120 menores.

Cientos de comisarías de la Policía Nacional y sedes regionales contaban con celdas de custodia y traslado de personas detenidas o arrestadas temporalmente. No había estadísticas disponibles sobre el número de personas detenidas. Según los informes del NMPT del gobierno, las condiciones físicas de las celdas eran variadas; algunas estaban hacinadas y con falta de higiene, especialmente la celda central de la Policía Nacional en Asunción, debido al cierre temporal de la cárcel de Tacumbú en enero.

La comida era adecuada en la mayoría de las prisiones y los reclusos tenían acceso a agua potable. El Ministerio de Justicia informó del robo por parte de funcionarios de prisiones y el mal uso de los suministros de alimentos en algunas penitenciarías. El 8 de septiembre, los inspectores del ministerio descubrieron a los guardias de la prisión en el centro correccional de menores de Itaguá sirviendo huesos y restos de comida de los oficiales, a los reclusos. El ministerio removió de su cargo al director de este centro en Itaguá, Blas Martínez y abrió una investigación interna. Según el ministerio, los presos en la cárcel de Tacumbú prefieren comprar sus propios alimentos de las cocinas privadas gestionadas por otros internos debido a la escasez y la mala calidad de los alimentos proporcionados por las autoridades penitenciarias.

Las prisiones de Tacumbú y Ciudad del Este y los centros de menores de Emboscada, Coronel Oviedo e Itaguá carecían de sistemas de control de temperatura adecuados, particularmente durante los meses de verano. Algunas prisiones, especialmente las de Tacumbú y Ciudad del Este, tenían celdas con iluminación inadecuada en la que los prisioneros fueron confinados durante largos períodos sin oportunidad de hacer ejercicio. La mayoría de los presos tenían acceso a las duchas e instalaciones

sanitarias, y la cárcel de Ciudad del Este construyó varios cuartos de baño durante el año. El saneamiento y atención médica eran adecuados, pero algunas prisiones carecían de suficiente personal médico para todos los turnos. Faltaba el cumplimiento a las normas de prevención de incendios, y varias prisiones, especialmente Tacumbú y Ciudad del Este, peligraban riesgo de incendios causados por cortocircuitos eléctricos debido a la sobrecarga de aparatos personales de los reclusos.

Las prisiones carecían controles de seguridad adecuados, sobre todo en la cárcel de Tacumbú, donde había 241 guardias de la prisión, un número insuficiente de acuerdo a las normas penitenciarias internacionales para supervisar a 2.611 prisioneros. Los presos con frecuencia llevaban armas y cometieron actos de violencia, en particular contra otros reclusos. Hubo informes de violación de reclusos a otros prisioneros. Supuestamente, los guardias de la prisión Juan Antonio de la Vega delegan en otros presos, la tarea de disciplinar a los reclusos.

El 11 de junio, el Defensor del Pueblo adjunto Edgar Villalba presentó una denuncia ante la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina General de la Fiscalía por los abusos y torturas presuntamente cometidos contra tres reclusas en la cárcel del Buen Pastor. El 20 de abril, un guardia contratado, Luis Villagra, y dos guardias mujeres, Elizabeth Ortiz y Olga Benítez, según los informes, esposaron y desnudaron a una reclusa. Un segundo recluso estaba esposado en una posición dolorosa, mientras que un tercer recluso fue pateado y esposado a una pared durante varios días. El Defensor del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia visitaron a los internos para verificar las historias, y las autoridades ministeriales abrieron una investigación, que estaba pendiente al finalizar el año.

Hubo informes creíbles de que bandas criminales dedicadas a la extorsión y el chantaje actuaban libremente dentro de la prisión. Los internos, usando teléfonos celulares ingresados de contrabando, llamaban a víctimas de robo de vehículo y exigían dinero para la devolución de los mismos. Hubo informes de reclusos que también se hacían pasar por agentes del EPP, jefes de policía, o intentaban extorsionar a las familias de las víctimas de secuestro. Las autoridades confiscaron regularmente los teléfonos móviles y tarjetas SIM de los reclusos, pero carecían de fondos suficientes para instalar equipos de bloqueo de telefonía celular.

Hubo varios motines en las cárceles durante el año. El 12 de enero, los internos de la cárcel de Tacumbú comenzaron una pelea después de que los guardias se negaron a servirles la comida, lo que resultó en la muerte de dos presos y lesiones de otras ocho personas, según los informes, debido al uso de balines de goma por la policía antidisturbios. Durante un motín el 21 de abril en las instalaciones del Correccional de Menores de Itauguá, los guardias Ignacio Fernández y Juan Saucedo dispararon hacia el pabellón de los internos, matando a Francisco Insfrán y Néstor Duarte, ambos de 16 años. Al final del año los guardias estaban en espera de juicio por homicidio. El 15 de julio, estallaron tres motines en la cárcel del Buen Pastor de las mujeres debido a la remoción de la directora de la prisión. El 31 de julio y 1 de

agosto, se produjeron revueltas adicionales en las instalaciones del Correccional de Menores de Itauguá, en las que dos jóvenes murieron al intentar escapar y otros 17 fueron heridos.

Para octubre, se habían reportado 30 muertes en prisión, incluyendo cuatro en el Correccional de Menores de Itauguá, siete en Tacumbú, y cuatro en Ciudad del Este. A nivel nacional, la violencia preso-a-preso representó ocho muertes, dos fueron homicidios por guardias, tres reclusos murieron durante intentos de fuga de prisión, dos murieron en electrocuciones accidentales, uno se suicidó, y las 14 muertes restantes fueron por causas naturales.

Administración: El registro de datos y archivo era insuficiente, los archivos utilizados en diferentes centros penitenciarios contenían diferentes formatos y datos. Los funcionarios del Ministerio de Justicia no podían acceder fácilmente a los archivos de los reclusos, ya que no había un archivo digital central del registro de prisioneros o un censo detallado de los internos.

Las autoridades penales y judiciales utilizaban con frecuencia medidas alternativas a la prisión para infractores sin antecedentes o no violentos, como ser el arresto domiciliario y la condena condicional. Las autoridades también empleaban alternativas para los delincuentes violentos y reincidentes.

Los ombudsmen de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia informaron que existen desafíos para la mejora de las condiciones carcelarias. Los mismos se mostraron receptivos a las denuncias, pero según los informes, encontraron resistencia por parte de guardias de la prisión, las autoridades y los internos.

Las autoridades permiten que los reclusos practiquen su religión. La cárcel de Tacumbú contenía centros de diferentes grupos religiosos. Según los informes, los visitantes tenían que ofrecer sobornos para visitar a los presos, lo que dificulta la representación efectiva de los internos por los defensores públicos. Los reclusos tienen derecho a hacer denuncias. En 2012 la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia habilitó formalmente líneas de teléfono celular y telefonía fija directas y permanentes para los presos y sus familias, lo que permite las denuncias anónimas. Durante el año, la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio inició una serie de visitas al azar y sin previo aviso de varias prisiones.

Las autoridades investigaron denuncias creíbles de condiciones inhumanas y tomaron medidas para aliviarlas dentro de las limitaciones de los recursos disponibles.

Monitoreo Independiente: El gobierno otorgó a los medios de comunicación, grupos de la sociedad civil independientes y representantes diplomáticos el acceso a las prisiones con coordinación previa. Los representantes de los medios de

comunicación, la Comisión de la ONU contra la Tortura, el NMPT, Defensoría del Pueblo, y otras ONG llevaron a cabo visitas a las cárceles.

Mejoras: El 3 de febrero, el Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio del Interior inauguró un curso de formación introductoria para los nuevos guardias cárceles. El 17 de junio, el Ministerio de Justicia inauguró el Centro de Estudios Penitenciarios para entrenar a los guardias de prisión para fomentar las evaluaciones y ascensos basados en el mérito.

Durante el año, el Ministerio de Justicia centralizó las compras de alimentos de las prisiones para combatir el robo y reventa de suministros por las autoridades carcelarias. El Ministerio inició un programa para modernizar todas las cocinas de los centros de detención a gas natural. El 15 de abril, el Ministerio inauguró una cocina moderna en la cárcel de Tacumbú.

De septiembre a diciembre, el Ministerio envió funcionarios a la República Dominicana y a los Estados Unidos para visitar las prisiones modelo y estudiar las mejores prácticas en gestión penitenciaria. Posteriormente, funcionarios del Ministerio informaron que reorganizaron la cárcel de Tacumbú, creando programas para la asistencia y la rehabilitación de los reclusos después de su puesta en libertad, y la realización de cursos de formación para los guardias de la prisión y el personal del Ministerio en materia de seguridad, prevención de drogas y métodos sobre cómo hacer cumplir las reglas de disciplina entre los reclusos y aplicar mejor prácticas en la organización y gestión de la administración de la prisión.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención sin orden judicial firmada por un juez y estipula que las personas detenidas deben comparecer ante un juez dentro de las 24 horas para una audiencia inicial. La policía puede arrestar a una persona aprehendida en flagrancia sin una orden judicial y detener al sospechoso por hasta seis horas, y la Oficina del Fiscal General puede detener a personas hasta 24 horas. La CODEHUPY reportó varios casos de arresto y detención arbitraria de personas sin orden judicial.

La policía detuvo a personas sin orden judicial o motivo salvo otro que ser el no poder presentar sus documentos de identificación personal. La Policía citó disposiciones legales del derogado código penal de 1914, que algunos estudiosos del derecho declararon es obsoleto y contrario a las garantías constitucionales. La policía llevó a cabo regularmente controles de ruta para detener y revisar los documentos de identidad de los pasajeros de transporte público y conductores privados. La policía generalmente liberó a las personas sin documentos de identificación después de conocer su identidad y realizar una búsqueda de órdenes de captura pendientes.

Función de la Policía y la Seguridad

La Policía Nacional, bajo la autoridad del Ministerio del Interior, es responsable de preservar el orden público, de la protección de los derechos y seguridad de las personas y entidades y de sus bienes, la prevención y la investigación de los delitos, y la implementación de las órdenes dadas por el poder judicial y los funcionarios públicos. Las fuerzas militares, bajo la autoridad del presidente, están encargadas de custodiar el territorio y las fronteras del país y de defender a las autoridades.

La ley autoriza al presidente a movilizar a las fuerzas militares en el país en contra de cualquier "agresión interna" que ponga en peligro la soberanía, la independencia del país, y la integridad de su orden constitucional democrático. La ley exige que el presidente notifique al congreso, en 48 horas, de una decisión de desplegar tropas. Por ley, la ubicación geográfica del despliegue se debe definir en la orden del presidente y puede estar sujeto al estudio del Congreso, pero la ley sí requiere el establecimiento de un tiempo límite para las implementaciones. En agosto de 2013, el presidente desplegó 400 efectivos militares a los departamentos de Concepción, San Pedro, y Amambay sin establecer un límite de tiempo. A finales de año estas tropas permanecían desplegadas, y el 10 de julio, el presidente ordenó el despliegue de otros 200 soldados. La CODEHUPY y algunos legisladores nacionales denunciaron abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluido el allanamiento de viviendas sin orden judicial.

El Ministerio de Defensa, también bajo la autoridad del presidente, pero fuera de la cadena de mando militar, se ocupa de algunos asuntos de defensa. El Ministerio de Defensa es responsable de los aspectos logísticos y administrativos de las fuerzas armadas, especialmente el desarrollo de la política de defensa. La ley autoriza a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y a las Unidades Antinarcóticos y Contraterrorismo de la Policía Nacional, ambos bajo la autoridad del presidente, a hacer cumplir la ley en los asuntos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Existen autoridades civiles a cargo de las fuerzas de seguridad, pero hubo casos de abuso por parte de miembros individuales de las fuerzas armadas y la policía.

La SENAD coordina los esfuerzos antinarcóticos y la prevención del consumo de drogas. La ley establece que la SENAD debe dirigir las operaciones en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para detener a individuos o hacer uso de la fuerza legalmente, la SENAD debe involucrar a miembros de la Policía Nacional en sus operaciones, pero a menudo lo hizo sin la presencia de la policía o de los fiscales.

La Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y el Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional son responsables de determinar si los homicidios de parte de efectivos policiales ocurrieron legítimamente en el cumplimiento del deber. El sistema de justicia militar tiene jurisdicción sobre el personal militar activo.

Una unidad especial del Ministerio Público investiga y procesa los abusos de derechos humanos. La unidad, que consta de seis fiscales, investigó 77 casos de uso excesivo de la fuerza (en comparación con 97 en 2013), abrió 10 casos de tortura (en comparación con 14 en 2013), e investigó 9 casos de investigación inadecuada de inocentes (en comparación con 20 en 2013). No había información sobre si alguno de estos casos resultó en condenas o sentencias.

El cuerpo de la Policía Nacional, con sus 27.000 miembros, luchó con una formación y financiación inadecuada y corrupción generalizada. El gobierno hizo esfuerzos durante el año para mejorar la investigación y sanción de los abusos de las fuerzas de seguridad y la corrupción. Hubo informes de participación de la policía en hechos punibles, las autoridades de la Policía Nacional reprimieron y comenzaron a investigar, sancionar y dar de baja a elementos involucrados en crímenes y violaciones administrativas.

De enero a noviembre, el tribunal dio de baja a 79 agentes de policía implicados en una variedad de hechos punibles, incluyendo homicidio, tráfico de drogas, robo, violación, secuestro, tráfico de armas, negligencia en el cumplimiento del deber, e insubordinación.

Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los medios de comunicación informaron sobre incidentes de participación policial en homicidios, violación, tráfico de armas y estupefacientes, robo de autos, robo, extorsión y secuestro, con abusos particularmente generalizados en Ciudad del Este y otros lugares de la frontera con Brasil.

El 3 de septiembre, las autoridades policiales removieron al Comisario de Alto Paraná Simeón Martínez, al Comisario Baldomero Jorge Benitez, y al Director de Investigaciones y el jefe de policía Marildo Rojas de sus cargos y abrieron una investigación sobre su presunta participación en la venta de 48 libras de cocaína y tres ametralladoras AK 47. El Ministerio Público también abrió una investigación, que continuaba al finalizar el año.

El 30 de junio, los oficiales de policía José Dolores Amarilla, Osvaldo Ayala y Joni Díaz fueron condenados a 15 años de prisión por extorsión, robo, secuestro, robo agravado, y lavado de dinero en relación a un camión blindado asaltado en febrero 2013. Los agentes de policía Hernán Zelaya Meza, Pablo Díaz Cuevas, Antonio Alcaraz Barreto, Hugo Vigneaux Torres y David Mereles Martínez fueron sentenciados a 10 años de prisión.

Según los informes algunos fiscales conspiraron con la policía y las organizaciones criminales para extorsionar y chantajear a los individuos. El 29 de agosto, las autoridades detuvieron al Fiscal Rubén Villalba por recibir Gs. 46.230.000 (US\$ 10 400) en concepto de soborno de parte del abogado Daniel Mitjans. Mitjans alegó que Villalba le extorsionó por Gs. 92.460.000 (20.800 dólares) y cinco vehículos de lujo

de su propiedad a cambio de desestimar dos casos de estafa contra Mitjans. El Ministerio Público suspendió a Villalba por tres meses sin goce de sueldo, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) despojó a Villalba de su inmunidad y abrió una investigación. El Ministerio Público acusó a Villalba de cohecho pasivo agravado; el caso estaba en marcha a finales de año.

Procedimientos de arresto y el trato de los detenidos

La policía podía arrestar a las personas cuando lo autorizaba una orden judicial o cuando descubren un crimen en progreso. La ley establece que después de hacer un arresto, la policía tiene hasta seis horas para notificar a la Oficina del Procurador General, momento en el que esa oficina tiene hasta 24 horas para notificar a un juez, si se propone enjuiciar. La ley otorga a los detenidos el derecho a una pronta atención judicial sobre la legalidad de su detención, y las autoridades respetaron este derecho y los detenidos generalmente fueron informados de los cargos contra ellos dentro del tiempo establecido.

La ley permite a los jueces a utilizar medidas como el arresto domiciliario y la fianza en casos de hechos punibles graves. En los casos de delitos menores, los jueces establecen con frecuencia una fianza demasiado alta como para que muchos acusados de escasos recursos la puedan pagar. Al mismo tiempo, una fianza mínima o inexistente es la que se fijaba para las personas con conexiones políticas o aquellos que tenían más posibilidades.

La ley otorga a los acusados el derecho a contratar a un abogado, y el gobierno provee defensores públicos a los que no pueden pagar un abogado. El gran número de casos, según la CODEHUPY, afecta negativamente la calidad de la representación de los defensores públicos. Los detenidos tienen acceso a los miembros de su familia. Los acusados tienen derecho al hábeas corpus, hábeas data, y otros procedimientos judiciales para decidir la legalidad de la detención o de otro modo obtener una liberación ordenada por la corte.

De conformidad con la ley que establece el Ministerio de la Defensa Pública, las autoridades reforzaron la oficina dándole autonomía jurídica, administrativa y presupuestaria dentro del sistema judicial. La oficina tenía 187 defensores públicos distribuidos en 41 unidades regionales y subregionales y unidades de observación de la tortura y las condiciones penitenciarias.

Los acusados tienen el derecho de demandar al Estado por detención ilegal.

Prisión Preventiva: La ley permite la detención sin juicio por un período equivalente a la pena mínima por el supuesto hecho punible. Este período puede variar desde seis meses a cinco años. Aproximadamente el 75 por ciento de los presos se encontraban en prisión preventiva. Las detenciones eran frecuentemente largas, y algunos funcionarios los mantenían detenidos más allá del tiempo máximo permitido. De

acuerdo con la ONG Centro de Estudios Judiciales, los procedimientos legales largos, la ineficiencia y la corrupción en el poder judicial causó retrasos significativos en los juicios y una prisión preventiva prolongada. Según el Centro de Estudios Judiciales, sólo el 29 por ciento de la población confiaba en el Poder Judicial en el 2011.

Hubo casos de reclusos liberados mucho después de sobrepasar el tiempo máximo permitido por la falta de capacidad administrativa, negligencia y corrupción.

e. Denegación de juicio público justo

La Constitución establece un poder judicial independiente; sin embargo, la influencia externa indebida la compromete seriamente. Los políticos y otras partes interesadas intentaban influir en las investigaciones y presionar a los jueces y fiscales casi de rutina. Los procesos de selección judicial y el jurado de enjuiciamiento de magistrados estaban altamente politizados, con cargos específicos asignados por ley a senadores, diputados, candidatos presidenciales, sindicatos de abogados, profesores de derecho y jueces de la Corte Suprema. Los tribunales eran ineficientes y sujetos a corrupción. También hubo acusaciones de que los jueces y los fiscales solicitaron o recibieron sobornos para desestimar o modificar los cargos contra los acusados. Las autoridades generalmente respetaron las órdenes judiciales.

Procedimientos de juicio

La Constitución establece el derecho a un juicio justo, que el poder judicial hace cumplir nominalmente a través de un proceso judicial largo. Un informe del Centro de Estudios Judiciales del 2013 reveló que sólo el 46 por ciento de los casos iniciados en 2013 se resolvieron dentro del año. Los acusados ricos o bien relacionados conspiraron con los jueces mediante la presentación de numerosos recursos que frenaron el proceso legal hasta que sus casos prescribieron. Una ley de 2012 obliga a una reducción en el tiempo de procesamiento de casos judiciales de cuatro a tres años, Sin embargo, a raíz de las protestas de la Asociación de Fiscales, el Congreso aplazó la ejecución hasta el año 2017.

La ley prevé el uso de los tribunales de tres jueces en lugar de juicio por jurados que se pronuncien sobre el procedimiento, determine la culpabilidad o inocencia, y dicte sentencias. Son necesarios por lo menos dos votos para la condena. Un juez preside los casos civiles, así como los casos de delitos menores con penas máximas de hasta dos años de prisión.

Todos los juicios están abiertos al público. La ley requiere que los fiscales imputen o liberen a las personas acusadas dentro de los 180 días del arresto, aunque los fiscales y defensores públicos en el Ministerio Público en varios casos carecían de los recursos necesarios para realizar adecuadamente su trabajo. Los acusados gozan de la presunción de inocencia y el derecho de apelación, y los acusados y los fiscales pueden presentar el relato de los testigos y demás pruebas escritas. Los acusados

tienen derecho a permanecer en silencio y no pueden ser obligados a declarar ni a confesar su culpabilidad. Los acusados tienen el derecho de acceso a la carpeta fiscal con las pruebas pertinentes a sus casos. Los acusados pueden confrontar a los testigos adversos, salvo en casos de trata de personas nacional o internacional, en el que las víctimas de los casos pueden testificar de forma remota o en presencia de los abogados de la parte demandada. Los acusados tienen el derecho a ser informados sin demora y en forma detallada de los cargos que se enfrentan, y se proporciona la libre interpretación. Los acusados tienen derecho a comunicarse con un abogado de su elección o con uno proporcionado por el estado.

La CODEHUPY, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales cuestionaron la imparcialidad de los procedimientos judiciales contra los 10 acusados en los asesinatos en Curuguaty en el 2012. El 4 de abril, la ONG internacional Fundación Baltasar Garzón presentó un escrito de amicus curiae solicitando la suspensión del caso Curuguaty, alegando que el proceso no fue justo e imparcial ya que el orden de allanamiento inicial se basó en una premisa falsa sobre la propiedad de la tierra en cuestión.

Presos y Detenidos Políticos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos y Recursos Judiciales Civiles

Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para presentar demandas por daños y perjuicios por violaciones de los derechos humanos. Hay reparaciones y compensaciones administrativas y judiciales para presuntos agravios, y las autoridades en general, las concedieron a los ciudadanos. El gobierno tuvo problemas para hacer cumplir las órdenes judiciales en esta área. El tribunal podrá ordenar reparaciones civiles incluyendo una justa indemnización a la persona lesionada. Los casos de violaciones de los derechos humanos de una persona pueden ser presentados a través de peticiones por parte de personas u organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez, podrá presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Decisiones de la Corte Regional de Derechos Humanos

El 11 de junio, el presidente firmó un proyecto de ley que devolvió 35.600 hectáreas de tierras ancestrales a la comunidad indígena Sawhoyamaxa en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006. Sin embargo, la tribu Sawhoyamaxa no pudo regresar a sus tierras ancestrales restauradas porque los anteriores propietarios de la tierra presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en junio. Los abogados de la tribu Sawhoyamaxa y representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INDI) no pudieron acceder a los detalles de la acción de inconstitucionalidad. El caso estaba pendiente al finalizar el año.

El caso Xákmok Kásek de 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguía pendiente a fin de año. El gobierno no había comprado tierras para la comunidad indígena Xákmok Kásek según lo exigido a la fecha de vencimiento del 24 de septiembre.

En 2012 el gobierno compró tierras suficientes para la comunidad indígena Yakye Axa en cumplimiento de un fallo del 2.005, pero no financió el desarrollo de la comunidad o la construcción de caminos de acceso adecuados. El 6 de mayo, los líderes de Yakye Axa exigieron al gobierno la construcción de la carretera de 22 millas antes de diciembre, de lo contrario abandonarían la propiedad.

Restitución de Bienes

El gobierno generalmente hizo cumplir las órdenes judiciales con respecto al decomiso, restitución o compensación por tomar la propiedad privada. Deficiencias sistémicas en el sistema de registro de la propiedad impidieron al gobierno de compilar un inventario fiable de sus tierras.

La propiedad de las tierras en disputa que fue el eje de la confrontación de Curuguaty 2012 (véase el apartado 1. a.) sigue sin resolverse. El 11 de abril, la Corte Suprema remitió una demanda de la empresa Campos Morombí a un juzgado de primera instancia para determinar la propiedad. El 15 de mayo, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Justo Cárdenas, afirmó que la propiedad de Marina Cue "categóricamente" pertenecía al Estado. A falta de claridad sobre la propiedad, un tribunal de primera instancia pospuso la audiencia para los campesinos involucrados en el enfrentamiento de 2012 que dejó 11 campesinos y seis policías muertos. El caso estaba pendiente de la sentencia del tribunal de primera instancia a fin de año.

El 26 de agosto, el instituto medió la restitución de 1.235 hectáreas de tierra en poder de Bioenergy Corporation SA a 50 familias en Mariscal López, Caaguazú. La restitución marcó el fin de un conflicto de 40 años sobre la propiedad de la tierra.

Según informes de prensa, el 2 de mayo, Luis Aníbal Schupp, el alcalde de San Carlos del Apa, Concepción, utilizó su influencia para iniciar el desalojo de Vilmar y Joel Eisen de su propiedad de 4.305 hectáreas en la ciudad de Mayor Otaño, Itapúa. Según los informes, Schupp actuó en nombre de Maria Magdalena Díaz, que había alquilado la propiedad y la devolvió a la familia Eisen en febrero después de atrasos en los pagos de alquiler que alcanzaron Gs. 377.0000.000 (US\$848.000). La familia Eisen pronto fue capaz de volver a su propiedad debido a la orden de restitución de un juez, pero Schupp y Díaz apelaron la decisión. El 28 de julio un juzgado de apelación validó el desalojo inicial, y el mismo día la policía desalojó a la familia Eisen. La familia presentó una demanda, alegando que tenía el título de propiedad válido, el registro de la propiedad y la documentación de apoyo. La tierra, según los

informes, por valor de Gs. 78.590.000.000 (US\$17.68), a partir de octubre fue ocupada por Ricardo González Forcado, un primo de Schupp. En la demanda, la familia Eisen acusó al Diputado Nacional Mario Cáceres y al vicepresidente Juan Afara de proporcionar protección política para el desalojo. El 22 de octubre, los miembros de la familia Eisen fueron arrestados después de una demanda, presentada por los abogados que representan al vicepresidente Afara y Luis Aníbal Schupp, acusando a la familia Eisen de lavado de dinero y de violar una ley que prohíbe a los extranjeros poseer inmuebles cerca de la frontera. La familia Eisen reclamó que la propiedad fue registrada bajo el nombre de Joel Eisen, Jr., un ciudadano del país. La familia Eisen informó haber recibido amenazas de muerte. Su demanda estaba pendiente al finalizar el año.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Catastro, en 2012 había más de 148 millones de hectáreas de propiedad registrada, superando el tamaño real de 100,3 millones de hectáreas del país por 47,6 millones de hectáreas. Había 47,7 millones de hectáreas con títulos de propiedad redundantes y denuncias creíbles de la complicidad de jueces y funcionarios públicos de falsificar títulos de propiedad para usurpar la propiedad de sus legítimos propietarios.

f. Interferencia arbitraria en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones.

El 25 de octubre, la Inspección General de la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario sobre la supuesta mala conducta de la abogada Katty González, una defensora de la reforma del poder judicial, después de que ella publicó una columna de opinión en un diario importante acusando a los jueces de la Corte Suprema de corrupción. Como parte de su investigación, los funcionarios tomaron fotografías de su residencia privada y las adjuntaron a su expediente. González denunció esto como invasión a su privacidad y acoso. El 11 de noviembre, la Corte Suprema archivó la investigación a González.

g. El uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos

Secuestros: Hubo varios secuestros por motivos políticos llevados a cabo por el EPP. El 2 de abril, el EPP secuestró a un joven de 16 años de edad, Arlan Fick, al parecer usándolo como escudo humano tras un tiroteo fatal con la policía después de robar la residencia que su familia alquilaba en Arroyito, Concepción. El EPP exigió a la familia el pago de un rescate de Gs. 2.310.000.000 (520.000 dólares) y que distribuyan la misma cantidad en alimentos y suministros a las comunidades cercanas. Aunque la familia de Fick obedeció, Arlan no fue liberado. El Ministerio Público abrió una investigación que seguía pendiente a fin de año.

El 7 de agosto, Jorge Isao Kawada fue secuestrado en Pedro Juan Caballero por un grupo de individuos armados que decían ser miembros del EPP y fue puesto en libertad el mismo día después de pagar un rescate de Gs. 231 millones (\$ 52.000). El 12 de agosto, las autoridades detuvieron a Oscar Coronel Riquelme en relación con el caso. El Ministerio Público dio apertura a una investigación, la misma estaba pendiente al finalizar el año.

Niños soldados: De acuerdo con las declaraciones del gobierno y la prensa, el EPP y el ACA reclutaron niños y adolescentes para participar en operaciones militares y servir en funciones de apoyo logístico y de comunicación. Los vídeos del EPP y ACA dados a conocer el 3 de abril y el 5 de septiembre mostraban a niños soldados que participan en actividades de formación y operaciones. El 19 de septiembre, las fuerzas militares mataron a tres miembros de la ACA durante una operación. Uno de los miembros tenía 14 años. El 24 de septiembre, el fiscal Joel Casal declaró que el Ministerio Público tenía pruebas de que el ACA tenía al menos cinco niños soldados en sus filas.

Según un informe de prensa, un niño soldado que escapó del EPP relató sobre abuso y disciplina dura y huyó del país para vivir con parientes en Buenos Aires, Argentina. La mayoría de los niños soldados del EPP aparentemente comenzaron en funciones de apoyo logístico, llevando suministros a los miembros del EPP en el campo y sirviendo como vigías. Los niños soldados, por lo general relacionados con los miembros adultos del EPP, se incorporaron más tarde como combatientes a tiempo completo, por lo general a las edades de 14 a 16.

Ver el Informe Anual del Departamento de Estado sobre *la Trata de Personas* en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ .

Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles, incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La ley y la Constitución garantizan la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno generalmente respetó estos derechos.

Violencia y Acoso : Algunos periodistas en ocasiones fueron objeto de hostigamiento, intimidación y violencia, sobre todo de parte de grupos de narcotráfico y bandas criminales, como también de parte de los políticos y la policía. Los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales internacionales informaron de varios incidentes de este tipo en contra de periodistas.

Según relatos, el 3 de febrero, Pablo López Centurión, un periodista que trabajaba para *E'a*, un periódico digital independiente, fue detenido, golpeado y despojado de su cámara y notas durante su visita a una estación de policía para preguntar sobre el estado de los manifestantes detenidos tras protestar por el aumento de tarifas de bus

en Asunción. López Centurión denunció haber sido golpeado por ocho agentes de policía y detenido durante dos horas. Fue puesto en libertad después de que la senadora Esperanza Martínez visitó la estación de policía para preguntar sobre su condición, pero sus pertenencias no le fueron devueltas. López presentó una denuncia contra los agentes ante la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y el NMPT. La CODEHUPY, SERPAJ y otras organizaciones no gubernamentales presentaron una demanda contra cinco policías, entre ellos el jefe de policía Edgar Galeano, por "tortura y detención arbitraria." El 17 de marzo, el Ministerio Público abrió una investigación contra López Centurión, alegando que golpeó a un policía. La investigación estaba pendiente al finalizar el año.

El 16 de octubre, dos personas dispararon y mataron al periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada Chamorro, después de interceptar el coche de Medina en un camino rural en Villa Ygatimi, Canindeyú. Medina era muy conocido por informar sobre el narcotráfico de la zona y la implicación de los políticos locales en actividades ilícitas. El alcalde de Ypejhú, Vilmar "Neneco" Acosta, mencionado en los reportes de Medina sobre el tráfico de estupefacientes junto con su hermano fueron los principales sospechosos en los asesinatos, pero no habían sido localizados aun a finales de año.

La censura o restricción de contenido: El 30 de julio, la jueza Patricia González emitió una orden judicial que prohibía a siete estaciones de televisión y nueve periódicos la publicación de vídeos o imágenes del senador Juan Carlos Galaverna, sin su consentimiento. El 31 de julio, la juez modificó la medida cautelar para prohibir a tres estaciones de televisión y dos periódicos la difusión de un video con contenido sexual relacionado con Galaverna. El 31 de julio, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados abrió una investigación sobre el caso en contra del asesor legal del senador, pero la archivó. Más tarde ese mismo día, el Fiscal General ordenó que la petición sea rescindida.

Las leyes sobre difamación / Seguridad Nacional: Los políticos a veces respondieron a las críticas de los medios de comunicación invocando legislación sobre difamación y calumnia y presentando demandas contra ellos para intimidar a los periodistas y reprimir nuevas investigaciones. La difamación es punible con hasta tres años de prisión y multas considerables.

El 21 de octubre, el jefe de policía Sebastián Talavera invocó los artículos sobre calumnia e injuria para demandar al periodista Aníbal Gómez Caballero, quien trabajaba para América FM, por haberlo acusado públicamente de corrupción a través de los medios sociales y la radio. El caso estaba pendiente al finalizar el año.

Impacto No Gubernamental: Hubo informes de que guerrilleros del EPP en San Pedro y Concepción y bandas criminales en Pedro Juan Caballero acosaban y amenazaban a periodistas. Por ejemplo, el 16 de mayo dos atacantes desconocidos mataron al periodista de radio Fausto Gabriel Alcaraz en Pedro Juan Caballero,

Amambay. Los informes de prensa señalaron que Alcaraz a menudo se refería a las organizaciones de tráfico de drogas y funcionarios de los gobiernos locales en sus informes. Otros periodistas y el senador Roberto Acevedo, pariente de Alcaraz y propietario de la emisora de radio en la que trabajaba Alcaraz, aseveraron que los narcotraficantes locales estaban detrás del asesinato.

Libertad en Internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró su contenido, y no hubo informes creíbles de que el gobierno controlara las comunicaciones en línea privadas sin orden judicial. El 25 de junio, el Organismo Regulador de Telecomunicaciones del Gobierno, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, emitió regulaciones que protegen el acceso de los consumidores al internet y multan a las empresas que limitan el acceso a Internet.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informó que el 37 por ciento de los habitantes utilizaba internet en 2013 y 27 por ciento de los hogares tenía acceso a internet. Esto no refleja el número de personas que tenían acceso a Internet en el trabajo o a través de los teléfonos móviles y teléfonos inteligentes existentes y en aumento. Según la UIT, había 104 celulares por cada 100 habitantes.

Libertad académica y eventos culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o eventos culturales.

b. Libertad de reunión y asociación pacífica

La ley contempla la libertad de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos.

Libertad de reunión

El 2 de junio, la ONG LGBT SOMOSGAY informó que la policía utilizó gases lacrimógenos y fuerza física contra los manifestantes que protestaban cerca de un centro de convenciones donde se llevaba a cabo la reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). SOMOSGAY afirmó que la policía golpeó a los manifestantes y periodistas con cachiporras, lo que resultó en lesiones a seis manifestantes y cuatro periodistas. La ONG también acusó a la policía de discriminación; alegando que la policía se enfocaba en la protesta LGBT, pero no tomaron medidas contra una protesta simultánea contra el aborto y oponentes del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los periodistas de HispanTV y Canal 13 Cristian Núñez, Enrique Dávalos, Jorge Merlo, y Miguel Rodríguez presentaron una denuncia ante la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público contra los agentes de policía de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional por

lesión corporal y coacción grave. La investigación en la Oficina del Ministerio Público estaba pendiente al finalizar el año.

c. Libertad de religión

Ver la siguiente publicación del Departamento de Estado, *Informe de Libertad de Religión Internacional* en www.state.gov/religiousfreedomreport/ .

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Apátridas

La ley establece la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. La Comisión Nacional de Refugiados del gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los desplazados internos, refugiados, refugiados que regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas de interés. El Comité de la ONG Iglesias para Ayudas de Emergencia actuó como representante legal local de la ONU.

Desplazamiento dentro del país: Hubo informes de prensa de residentes y empresarios de los departamentos de San Pedro y Concepción que abandonaron la zona debido a amenazas de muerte del EPP y ACA o la falta de seguridad. Esto incluyó a la familia del ex alcalde de Tacuati Luís Lindstrom, quien fue asesinado en mayo de 2013 por personas que dicen pertenecer al EPP.

Viajes al Exterior: Por ley, las autoridades podrán denegar la expedición de pasaportes a los ciudadanos que no demuestran que han cumplido con sus obligaciones tributarias.

Protección de Refugiados

El acceso al asilo: Las leyes del país prevén la concesión de asilo o estado de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados.

A partir de noviembre la Comisión Nacional de Refugiados recibió 17 solicitudes de condición de asilo y concedió 10, todos a ciudadanos sirios. Un informe del ACNUR señaló que desde 2002, el país había recibido a 136 refugiados y un solicitante de asilo. Sin embargo, la comisión nacional informó que a partir de 2002 a noviembre, el país aceptó 120 refugiados y 20 refugiados reubicados de otros países.

Soluciones duraderas: El gobierno permitió a las personas a quienes se les negó asilo o estatuto de refugiado que obtengan la residencia permanente legal.

Sección 3. Respeto a los Derechos Políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno.

La Constitución y las leyes establecen el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno a través de elecciones libres y justas, que se ejerce a través de elecciones basadas en el sufragio universal.

Elecciones y Participación Política

Elecciones recientes: En las elecciones generales multi-partidarias de abril de 2013, Horacio Manuel Cartes Jara del Partido Colorado ganó la presidencia. Los observadores internacionales de la UE, la OEA y la Unión de Naciones Suramericanas describieron a las elecciones como libres y justas.

Los informes de observación electoral de la OEA y la UE destacaron la alta participación de votantes y la celebración pacífica y ordenada de las elecciones. Los informes también señalaron el profesionalismo del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la ejecución oportuna del calendario electoral.

Durante las elecciones generales de 2013, el TSJE colaboró con una Fundación local llamada Saraki, para fomentar la participación de las personas con discapacidad. Con miras a las elecciones municipales de 2015, el TSJE estaba promoviendo la accesibilidad para prever la participación de las personas con discapacidad. Estas iniciativas incluían la inscripción de votantes y la accesibilidad física a los centros de votación y urnas.

Partidos Políticos y Participación Política: La ANR y el Partido Liberal (PLRA) mantuvieron el control del proceso político desde larga data. Los partidos ejercieron fuerte influencia sobre la Corte Suprema, los juzgados de primera instancia, y la selección y disciplina de los jueces y fiscales. Ambos partidos tradicionales tuvieron una influencia significativa sobre la modificación y creación de leyes electorales a través de sus mayorías en el Congreso. La unidad de supervisión de los organismos electorales, el TSJE, se regía por los representantes partidarios seleccionados tanto por la ANR y el PLRA, y en menor medida, de otros partidos políticos.

Los partidos políticos nuevos, pequeños y no tradicionales enfrentan obstáculos en la obtención de representación considerable en el Congreso debido a fórmulas de asignación de asientos en el código electoral, que favorecen a los partidos más grandes.

El código electoral restringe a los votantes a la selección de listas de candidatos, a su vez seleccionados por los líderes del partido, en lugar de los candidatos individuales. Los candidatos independientes se enfrentan a obstáculos en la creación y gestión de campañas, ya que por ley tienen que formar un movimiento o partido político y presentar un número mínimo de candidatos en una lista para poder competir.

El sistema de subsidios y compensaciones electorales, que se establece por ley para financiar a los partidos políticos, premia a los partidos políticos por el número de votos obtenidos, y el gobierno transfiere anualmente sumas considerables de subsidios, sobre todo a la ANR y al PLRA.

Participación de la Mujer y las Minorías: El código electoral exige que al menos el 20 por ciento de los candidatos de cada partido en las internas sean mujeres, y los partidos cumplieron con el requisito. Hubo 20 mujeres en el Congreso (nueve de 45 senadores y 12 de los 80 diputados nacionales). De los 40 jueces del tribunal de apelaciones, 16 eran mujeres. En julio de 2013 fue elegida una mujer como uno de los tres jueces electorales que supervisan el TSJE. Dos de los nueve miembros de la Corte Suprema eran mujeres, y otra mujer era gobernador departamental. Tres mujeres más dirigían ministerios a nivel de gabinete, y siete mujeres ocupaban puestos de rango ministerial. La jefa del partido político más grande del país, la ANR, era del sexo femenino.

En 2011 el partido Kuña Pyrenda (Plataforma de la Mujer) surgió con el objetivo de defender los derechos de las mujeres. 250 líderes y activistas femeninas prominentes firmaron su manifiesto fundacional, incluyendo cinco que eran entonces ministros del gobierno y una ex viceministro. Ninguno de los más de 500 candidatas y candidatos del partido Kuna Pyrenda ganó en las elecciones generales de abril de 2013.

Aunque no hubo impedimentos legales a la participación de las minorías o personas indígenas en el gobierno, no hubo personas indígenas o miembros de minorías como gobernador o en el gabinete, la legislatura, o la Corte Suprema.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno

La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno generalmente no aplicó la ley efectivamente. Numerosos funcionarios de todas las ramas y en todos los niveles de gobierno con frecuencia se dedican a prácticas corruptas. Los casos suelen pasar varios años en los tribunales. En virtud de una ley que prohíbe que los casos judiciales se investiguen más de cuatro años, los políticos condenados en tribunales inferiores evitan sistemáticamente el castigo mediante la presentación de apelaciones y recursos hasta que su caso prescriba. Los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial indicaron que la corrupción era un problema grave. En 2013 y durante el año, hubo varias leyes nuevas, decretos del poder ejecutivo y acordados de la Corte Suprema a favor de una mayor transparencia en el sector público.

Corrupción: La Fiscalía tenía una unidad especializada de fiscales para investigar y combatir la corrupción. El Ministerio de Justicia trabajó estrechamente con, e inició muchas investigaciones a pedido de la Contraloría, que es responsable de la auditoría y la inspección del tesoro público, la gestión y los procedimientos operativos de las

entidades gubernamentales, el departamento y los gobiernos municipales, empresas estatales y otras entidades con intereses financieros gubernamentales. La unidad de la fiscalía y la Contraloría generalmente colaboraron con la sociedad civil, por lo general mediante el seguimiento de denuncias de corrupción dados a conocer por la prensa. Ambas estaban bien financiadas y generalmente operaban con eficacia.

La Auditoría General del poder ejecutivo cooperó con la Fiscalía y la Contraloría en la investigación de casos de corrupción. La Oficina del Procurador General recibió informes del auditor general, sobre demandas civiles en nombre del Estado para recuperar daños monetarios. El Sistema Nacional de Integridad, un programa dependiente del poder ejecutivo, trabajó con decenas de unidades de transparencia interna en varios ministerios, Aduanas y la Dirección Nacional de Contratación Pública.

Por ley la Secretaría Nacional Anticorrupción es responsable de coordinar y supervisar la aplicación de políticas públicas en materia de transparencia y corrupción. También es responsable de la formulación de estrategias para prevenir, investigar y denunciar actos de corrupción, en coordinación con otras entidades gubernamentales. La institución es una parte de la rama ejecutiva.

Para octubre, el JEM retiró cinco jueces y fiscales, reprendió a otras seis personas, y no canceló ningún procedimiento debido a las renuncias de los magistrados. En 2013 el JEM removió ocho jueces y fiscales y sancionó a otros 10, y tres magistrados renunciaron antes de la finalización del procedimiento en su contra. Como resultado de 94 auditorías de las agencias gubernamentales realizadas durante el año, la Contraloría presentó 80 informes a la Oficina del Procurador General para iniciar acciones civiles encaminadas a la recuperación de activos mal habidos por un importe aproximado de Gs. 24.500.000.000 (US\$ 5,5 millones). La Contraloría también presentó 33 informes a la Oficina del Procurador General para su posible investigación penal y el enjuiciamiento de presuntos actos de corrupción, lo que representa aproximadamente Gs. 12 mil millones (US\$ 2,7 millones).

El 14 de abril, el Ministerio Público acusó al senador Enzo Cardozo y Rody Godoy, ex ministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y a otros 25 funcionarios antiguos y actuales del ministerio por estafa y lesión de confianza. La acusación alega que los acusados malversaron Gs. 3,7 mil millones (US\$832.000) asignados a dos programas del ministerio para combatir la pobreza y promover la cría de ganado. El 6 de septiembre, el Ministerio Público volvió a imputar a Cardozo y Godoy con un cargo nuevo de lesión de confianza y estafa en relación con el presunto robo de Gs. 68 mil millones (US\$ 15.3 millones), supuestamente transferidos ilegalmente por funcionarios de los ministerios a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay. El 3 de abril y el 4 de septiembre, el Senado aprobó en dos ocasiones el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Cardozo, permitiendo que la investigación de la Fiscalía siga su curso que estaba pendiente al finalizar el año.

El 2 de mayo, la Fiscalía acusó a la médico Perla Paredes Acosta, hija de la diputado nacional Perla de Vázquez, con múltiples casos de cobro indebido de honorarios, producción y uso indebido de documentos laborales. Aunque los médicos están autorizados por ley a ocupar varios cargos, la Fiscalía alegaba que Paredes recibió sueldos de cinco instituciones gubernamentales diferentes sin ir a trabajar. La Fiscalía informó que Paredes Acosta recibió ilegalmente el pago de sueldos por Gs. 424 millones (US\$ 95.400) del Hospital Distrital de Lambaré, el poder judicial de Lambaré, Instituto de Previsión Social, Cámara de Diputados, y la Itaipú Binacional. El 14 de julio, un juez sentenció a Paredes culpable y se le dio a una pena de prisión condicional de dos años.

Durante el año, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda dio a conocer un esquema de fraude impositivo de Gs. 355.000.000.000 (US\$ 79,9 millones). Al parecer, ex funcionarios técnicos del ministerio supuestamente establecieron empresas fantasmas para vender facturas fraudulentas a empresas privadas, que a su vez utilizan estas facturas para crédito fiscal. Más de 200 empresas privadas, incluidas grandes empresas de importación, participaron en el esquema. La SET presentó denuncias ante el Ministerio Público, y las autoridades detuvieron al autor intelectual del régimen, la investigación continuaba al finalizar el año.

Divulgación Financiera: La Constitución requiere que todos los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios y oficiales electos de entidades gubernamentales independientes, presenten una manifestación de bienes dentro de los 15 días después de asumir el cargo o ser nombrado y otra vez a los 15 días después de terminar su mandato o asignación. A partir de enero los empleados públicos también deben declarar los activos e ingresos de los cónyuges e hijos dependientes.

La ley obliga a la antiguos y actuales que supervise y verifique las manifestaciones, pero la ley no permite que éstas se pongan a disposición del público. La oficina puede hacer publicar los ingresos y manifestaciones de bienes sólo a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía, o las autoridades judiciales. La Fiscalía ocasionalmente inició investigaciones por inconsistencias en la información presentada.

La ley prohíbe a los funcionarios de ocupar cargos públicos por hasta un máximo de 10 años por el incumplimiento de presentar la manifestación de bienes e impone multas de hasta Gs. 19.100.000 (\$ 4.300). La ley obliga a la antiguos y actuales el monitoreo de todas las manifestaciones. Desde 2013, se presentaron aproximadamente 70.000 declaraciones de activos ante la Contraloría, quien cuenta con un sistema de declaración jurada de bienes y rentas en línea para la presentación de declaraciones de activos. Los documentos presentados a menudo llegaban tarde, estaban incompletos o contenían información engañosa. Además muchos

simplemente no revelaban sus finanzas. Los legisladores eran conocidos por ignorar la ley con impunidad, utilizando su inmunidad política para evitar la investigación o el enjuiciamiento.

En cumplimiento de una directiva ministerial de 2010, todos los agentes de policía deben presentar informes de patrimonios cada tres años y cuando son elegibles para el ascenso. No hubo informes sobre el cumplimiento de esta directiva.

Tras la toma de posesión del gobierno, el presidente, el vicepresidente, los diez ministros del Poder Ejecutivo y otros veintidos empleados a nivel de gabinete y de alto rango presentaron sus declaraciones juradas con la información financiera de acuerdo con la Constitución.

Acceso Público a la Información: La Constitución establece el acceso del público en general a la información gubernamental. Los ciudadanos y los no ciudadanos, incluidos los medios de comunicación extranjeros, tuvieron acceso a la información gubernamental. El 18 de septiembre, el presidente firmó una ley que regula la norma constitucional. La ley establece un marco jurídico con respecto a los plazos de tramitación, tasas, sanciones penales o administrativas por incumplimiento, mecanismos para la revisión de las negaciones de divulgación, y listas de excepciones que describen los motivos de la no divulgación. El 21 de septiembre, el Ministerio de Justicia inauguró la Dirección de Acceso a la Información Pública.

El Poder Judicial, la presidencia, y casi todos los ministerios del gobierno revelaron información sobre sus empleados públicos y sus salarios, bonificaciones y compensaciones extraordinarias. El 20 de mayo, el presidente firmó la ley 5189, que ordena la divulgación de toda la información de la nómina del gobierno. En septiembre, 40 instituciones gubernamentales, incluidos los ministerios, empresas públicas y entidades locales y estatales, habían dado a conocer los nombres de sus funcionarios y sus salarios.

El 4 de abril, el Ministerio de Hacienda lanzó el Sistema Público de Informes y Reportes (SPIR), que estuvo disponible en su sitio web y permitió el acceso público a los informes financieros, indicadores de desempeño, los salarios públicos, los gastos y la ejecución del presupuesto.

El 18 de julio, el Ministerio de Educación puso en marcha un sitio de datos abiertos que permitió al público acceder a información sobre los servicios educativos, el número de profesores y estudiantes por institución, descripciones de las instalaciones escolares, así como los salarios y las calificaciones de todo el personal.

El 4 de noviembre, la Secretaría Técnica de Planificación lanzó una página de internet que permite al público realizar un seguimiento de los avances como parte del plan de Gobierno Abierto.

Sección 5. Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas Violaciones de los Derechos Humanos

Más de 50 grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo, y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), operaron generalmente sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Las principales organizaciones coordinadoras de ONG locales que representan a muchas ONG de derechos humanos locales trabajaron de manera independiente.

Los funcionarios del gobierno cooperaron con las organizaciones no gubernamentales nacionales y se reunieron con los monitores de las ONG nacionales, pero a menudo no tomaron medidas en respuesta a sus informes o recomendaciones. El gobierno generalmente cooperó con los grupos internacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales humanitarias y organizaciones internacionales gubernamentales y regularmente permitía las visitas de sus representantes.

Organismos estatales de derechos humanos: Aunque el mandato del Defensor del Pueblo Manuel Páez Monges, principal defensor de derechos humanos del país, expiró en 2006, él continuó en su cargo porque la Cámara de Diputados aún tenía que votar por un reemplazo. El defensor del pueblo empleó aproximadamente 163 abogados y personal de apoyo. Organizaciones de derechos humanos, víctimas de la dictadura de Stroessner, y varios miembros del Congreso criticaron fuertemente al defensor del pueblo por lo que ellos consideran un manejo ineficaz y negligente de más de 20.000 casos de compensación atrasados para las víctimas de la dictadura de Stroessner. El 8 de noviembre, la Oficina del Procurador General anunció el inicio de una investigación sobre supuestas irregularidades en el desembolso de la Defensoría del Pueblo desde 2004 de Gs. 462.300.000.000 (US\$104 millones) a 6.528 víctimas de la dictadura de Stroessner. Su oficina carecía de independencia e iniciativa, no publicó ningún informe durante el año, y no había emitido un informe anual sobre los derechos humanos en el Congreso desde 2005.

Las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados realizaron frecuentes viajes de investigación dentro del país, incluyendo visitas a varias prisiones, y emitieron informes en julio. El Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados mantuvo 32 reuniones, decidió sobre 34 propuestas legislativas relativas a los derechos humanos, celebró cuatro audiencias públicas sobre temas de derechos humanos, y recibió aproximadamente 100 visitantes cada semana para discutir cuestiones de derechos humanos.

El NMPT, creada de conformidad con los compromisos del país en virtud de la Convención Internacional contra la Tortura, tiene la prerrogativa legal de visitar e inspeccionar, sin autorización judicial, cualquier prisión, comisaría, instalación militar, albergue de niños, y cualquier casa de retiro. Los comisionados del NMPT

son seleccionados por una comisión interinstitucional integrada por representantes de las tres ramas del gobierno y la sociedad civil. Durante el año el NMPT visitó varias cárceles, prisiones e instituciones correccionales y bases militares. Participó en varias audiencias públicas sobre el abuso contra cadetes.

Varios ministerios gubernamentales tenían oficinas de derechos humanos para vigilar el cumplimiento de la legislación sobre derechos humanos. Por ley, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia es la unidad primaria de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, que coordina con todas las oficinas de la materia y es responsable de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Durante el año, las autoridades ministeriales reestructuraron la Oficina de Derechos Humanos, re-asignaron y redujeron su personal y los recursos disponibles. Varias organizaciones no gubernamentales protestaron contra estos cambios.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación basada en la raza, género, discapacidad, idioma o condición social, pero esto no se ha aplicado efectivamente. Las mujeres, las personas LGBT, personas indígenas, y las personas de ascendencia africana también se enfrentaron a la discriminación. El país no tiene una ley integral contra la discriminación, esto socavó la aplicación de la cláusula constitucional contra la discriminación y la protección y restitución a las víctimas de discriminación y abusos sociales.

Mujer

La violación y la violencia doméstica: La ley penaliza la violación, incluida la violación conyugal, y establece penas de hasta 10 años de prisión por violación o abuso sexual. Si la víctima es menor de 18 años de edad, las penas van de tres a 15 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía, la violación sigue siendo un problema significativo y generalizado, incluyendo informes de violación en grupo de parte menores de edad drogados. El gobierno generalmente procesó las denuncias de violación y a veces obtuvo condenas; sin embargo, muchas violaciones no se denuncian debido al miedo al estigma o venganza. La Fiscalía carecía una unidad especializada para los casos de violencia de género y abuso de niños y adolescentes. La unidad especializada en trata de personas y explotación sexual comercial de los niños de la Fiscalía a veces fue asignada casos, pero carecía de recursos suficientes.

La Policía respondió pero generalmente no le daba prioridad a los informes de violaciones. La policía recibió sólo 453 denuncias de violación en 2013; Sin embargo, la Fiscalía reportó 903 casos de violación, 346 casos de intento de violación, y un adicional de 476 casos de violaciones sexuales contra menores de edad.

El 13 de junio, la Fiscalía acusó al jefe de policía del Departamento de Cordillera Ramón Agüero Sosa con la violación e intento de homicidio de una empleada del departamento de policía de Caacupé. Según la denuncia de la víctima, Agüero Sosa la secuestró a punta de pistola y se la llevó a un hotel, donde la violó y la golpeó. La víctima informó más tarde a la prensa que él y otros oficiales de la policía la amenazaron para que retire la denuncia. Aunque la Fiscalía ordenó la detención del jefe de policía, al finalizar el año no había sido detenido.

Aunque la ley penaliza la violencia doméstica, incluyendo el abuso psicológico, y estipula una pena de dos años de prisión o multa si es declarado culpable, se requiere que el abuso sea habitual y el agresor y la víctima estén "cohabitando o viviendo juntos." Los jueces normalmente multaban a los condenados pero comenzaron a dar penas privativas de libertad para velar por la seguridad de la víctima. A pesar de un aumento de las denuncias de violencia doméstica, las personas a menudo las retiraban poco después de la presentación de las mismas debido a la reconciliación conyugal o presión familiar. En algunos casos los juzgados mediaron en casos de violencia doméstica. La violencia doméstica era común, y miles de mujeres recibieron tratamiento por lesiones sufridas en altercados domésticos.

No hay estadísticas oficiales precisas con el número de casos de violencia doméstica. En 2013 la Fiscalía registró 6.823 casos de violencia doméstica. Las mujeres fueron identificadas como víctimas en tres cuartas partes de estos casos. En 2013 la Policía Nacional registró 1.197 denuncias por violencia doméstica.

El Ministerio de la Mujer tomó acciones para combatir el problema, incluyendo la promoción de la línea telefónica nacional de 24 horas para víctimas de violencia doméstica. La línea directa recibió 13.646 llamadas en 2013; al 30 de septiembre, había recibido más de 9.000.

La Policía Nacional supervisó las unidades de violencia doméstica en todo el país, que cuenta con aproximadamente 120 agentes de la policía y es administrada desde las comisarías existentes en Asunción (tres unidades), Encarnación y Villarrica. Otras cinco unidades fueron inauguradas durante el año. De enero a septiembre, las unidades recibieron 3.744 denuncias. A partir de septiembre, el Ministerio de la Mujer recibió y monitoreó 1.311 denuncias de violencia doméstica - incluyendo 247 de golpes, 501 de abusos psicológicos, 36 por abuso sexual, y 254 por incumplimiento de prestaciones. En el 2013, en comparación, hubo un total de 3.256 denuncias de abuso doméstico. Cada persona puede presentar más de un tipo de denuncia sobre el abuso doméstico. Para septiembre hubo 1.623 personas que presentaron denuncias y recibieron asistencia de parte del ministerio, de los cuales 575 fueron presentadas durante el año y 670 casos continuaban de años anteriores. El Ministerio ofrece información a las víctimas de violencia doméstica, asesoría y apoyo psicológico y legal.

El 27 de agosto, Lucía Sandoval fue absuelta y puesta en libertad después de tres años de prisión en espera de juicio por el presunto homicidio en 2011 de su marido, Huber Martínez Villasboa. Según los informes, Sandoval fue supuestamente víctima de abuso doméstico. Cuando ella logró obtener una orden de restricción contra su marido, el juzgado le informó que carecía de fondos para la orden y le sugirió que la entregue personalmente. Sandoval lo hizo, y al parecer su marido la amenazó con un arma y, en medio de un forcejeo, presuntamente él se pegó un tiro. El tribunal desestimó el caso por falta de pruebas y ordenó la liberación de Sandoval.

El Ministerio de la Mujer operaba un albergue para mujeres víctimas de la trata de personas o la violencia doméstica en Asunción, que fue sede de 28 mujeres y 37 niños a partir de septiembre. El ministerio también coordinó los esfuerzos de asistencia a las víctimas, campañas de publicidad y entrenamiento con la Policía Nacional y las unidades de atención a la salud. El Ministerio de la Mujer, la Fiscalía y las ONG de mujeres proporcionan salud y asistencia psicológica, incluyendo vivienda, a las víctimas. El Ministerio también impartió cursos de asistencia a las víctimas para la policía, trabajadores de la salud, y fiscales. A partir de septiembre, los talleres organizados por el Ministerio sobre violencia doméstica y de género llegaron a 2.104 personas, en comparación con 1835 personas en 2013.

La Ablación o Mutilación Genital Femenina (MGF): No existe una ley que prohíbe la MGF / C, y la práctica era prácticamente inexistente en el país.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual y establece una pena de dos años de prisión o multa; Sin embargo, el acoso sexual sigue siendo un problema generalizado para muchas mujeres, sobre todo en entornos laborales. Los fiscales encontraron que las denuncias de acoso sexual y abuso eran difíciles de probar por miedo a las represalias en el lugar de trabajo y las presiones sociales contra las víctimas, muchas de las cuales retiraron sus denuncias o no estaban dispuestas a seguir cooperando con los fiscales.

El 27 de agosto, la modelo Gabriela Wolscham presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema contra el juez de la niñez y adolescencia Guillermo Pereira por acoso sexual. Wolscham alegó que Pereira la acosó con imágenes y mensajes de texto enviados a su teléfono celular durante dos meses, mientras duraba la causa del régimen de visitas del hijo menor de Wolscham. La Corte Suprema suspendió inmediatamente a Pereira, y el JEM inició una investigación. La prensa informó que Pereira acosó y pidió favores sexuales a otras dos mujeres, y que supuestamente amenazó con fallar en contra de ellas en sus casos si no accedían a sus pedidos. El 1 de septiembre, Pereira renunció a fin de evitar una investigación realizada por el JEM y la Corte Suprema. El 2 de septiembre, el JEM cesó su investigación de Pereira, pero le prohibió desempeñarse de nuevo como juez.

Algunas denuncias se resolvieron en privado sin la participación de los fiscales. En 2013 la Fiscalía registró 114 casos de acoso sexual y tres casos de intento de acoso sexual.

Derechos Reproductivos: Las parejas y los individuos tienen el derecho a decidir libremente el número, secuencia y el momento de tener hijos, y tenían la información y los medios para hacerlo, sin discriminación. Las últimas estadísticas de la ONU estimaron que la tasa de mortalidad materna era de 110 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, con aproximadamente el 85 por ciento de los partos atendidos por personal de salud calificado. Un informe de 2013 de UNICEF declaró que la alta tasa de mortalidad materna se debió en parte a la falta de información sobre la necesidad de atención prenatal temprana, la falta de educación en la detección de signos de alerta temprana de complicaciones, la falta de ambulancias y suministros médicos en las zonas rurales, y las largas distancias al centro de salud más cercano. Los servicios de salud reproductiva se concentran en las ciudades y las zonas rurales enfrentan brechas significativas en la cobertura.

El embarazo en adolescentes sigue siendo un problema. El Fondo de Población de las Naciones Unidas informó que el 20 por ciento de todos los embarazos se produjeron entre las edades de 10 y 14. También se informó que aproximadamente el 2 por ciento de todas las muertes maternas correspondió a ese grupo etario.

Discriminación: Las mujeres disfrutaron generalmente el mismo estatus legal y derechos que los hombres, incluyendo una ley que obliga al mismo salario por trabajo igual; Sin embargo, la discriminación por motivos de género fue generalizada. Las mujeres experimentan más dificultades que los hombres en el empleo y la ocupación (ver sección 7.d.). Las mujeres generalmente obtienen empleo como trabajadoras domésticas, secretarías, personal de ventas y representantes de servicio al cliente. El Ministerio de la Mujer promueve los derechos de las mujeres y patrocina programas destinados a dar a las mujeres igualdad de acceso al empleo, seguridad social, vivienda, crédito, propiedad de la tierra, y oportunidades de negocio.

La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) del gobierno informó que los niveles de desempleo son de aproximadamente el 10 por ciento para las mujeres y el 6 por ciento para los hombres. Las estadísticas de la DGEEC de 2013, las más recientes disponibles, indicaron que las mujeres en el sector privado ganan, en promedio, 91 por ciento de la remuneración mensual de sus homólogos masculinos por ocupaciones similares. Según las mismas estadísticas de la DGEEC, las mujeres en el sector público ganan, en promedio, 83 por ciento de la remuneración mensual de sus homólogos masculinos por trabajos similares. Por otra parte, el *Informe de Competitividad* del Foro Económico Mundial indicó que en promedio las mujeres ganaban el 55 por ciento de los salarios de los hombres por un trabajo comparable.

Niños

Registro de Nacimiento: La nacionalidad se obtiene por nacimiento en el territorio del país, por nacimiento a los funcionarios públicos en servicio en el extranjero, o por nacimiento de un ciudadano que reside temporalmente fuera del país. La ciudadanía se transmite a todos los nacionales que alcanzan la edad de 18, así como a las personas mayores cuando están naturalizadas. Los certificados de nacimiento y documentos de identidad nacionales son un requisito previo para acceder a los servicios del gobierno, incluyendo la obtención de un pasaporte. Hubo informes de altos niveles de actas de nacimiento falsas, que a su vez condujo a la producción de otros documentos de identidad falsos.

Educación: La educación es gratuita, obligatoria y universal, desde el preescolar hasta la escuela secundaria. Según el gobierno, las niñas de familias rurales tienden a abandonar la escuela a una edad más joven que los muchachos. Los autobuses financiados o subvencionados por el gobierno u otros medios de transporte públicos eran escasos en las zonas rurales. Aproximadamente el 10 por ciento de los niños de familias de escasos recursos no tenía acceso a la escuela, debido a la falta de fondos o ingreso temprano al mercado laboral.

Abuso Infantil: La Coalición por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) declararon que la violencia contra los niños fue generalizada e igualmente frecuente entre las familias rurales y urbanas. Las autoridades no suelen actuar sobre las denuncias de abuso de menores. En 2013 la Policía Nacional recibió 19 denuncias de abuso de menores, de las cuales 17 fueron resueltas. En 2013 la Fiscalía reportó 954 casos de maltrato infantil.

No había refugios gubernamentales para niños maltratados. Algunas organizaciones de caridad católicas operaban varios hogares y orfanatos de niños. En muchas ciudades el consejo para los derechos de los niños de la municipalidad asistía a niños víctimas de abuso y maltrato, pero muchos consejos municipales sufrían de insuficiencia de fondos y falta de profesionales capacitados y con experiencia.

De acuerdo con la SNNA y la NMPT, había aproximadamente 60 albergues infantiles, que contenían a más de 2.000 niños. La SNNA trabajó con UNICEF para fortalecer el sistema de protección de la infancia y mejorar la receptividad del gobierno a los reclamos de abuso.

Matrimonio precoz y forzado: La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, y se requiere el consentimiento de los padres para las edades de 14 a 16. El matrimonio de los menores de 14 años sólo se permite con autorización judicial en circunstancias excepcionales. De acuerdo con el Registro Civil Nacional, menos del un por ciento de todas las mujeres que se casaron en el 2012 lo hicieron antes de los 18. Las uniones de hecho de menores de 18 fueron más frecuentes en las poblaciones indígenas y rurales. No hubo informes de matrimonio forzado.

La Ablación o Mutilación Genital Femenina (MGF): No existe una ley que prohíbe la MGF / C, y la práctica era prácticamente inexistente en el país.

Explotación Sexual de Niños: La explotación sexual de niños, principalmente en la prostitución, era un problema grave. De acuerdo con la SNNA, muchos niños se vieron obligados a ejercer la prostitución o el servicio doméstico para sobrevivir. La ley establece penas de hasta seis años de cárcel por prostitución de personas entre las edades de 14 y 17 y ocho años de cárcel para las menores de 14 años.

La edad mínima de consentimiento es de 14 años cuando casados, y 16 cuando no están casados. Si bien existe una ley la violación de menores para los menores de 14, la pena máxima es una multa para las parejas del sexo opuesto y cárcel para parejas del mismo sexo. La aplicación no fue estricta. El código penal prohíbe la producción, distribución y posesión de pornografía infantil o de adolescentes menores de 18 años. La producción de imágenes pornográficas de niños puede resultar en una multa o hasta tres años de prisión. Las autoridades pueden aumentar esta pena a 10 años de prisión, dependiendo de la edad del niño y la relación del niño con el abusador.

En el 2013 la Fiscalía reportó 1.829 casos de abuso sexual en niños y 141 casos de intento de abuso sexual en niños.

Secuestros Internacionales de Niños: El país es firmante de la Convención de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Para obtener información específica del país ver el informe del Departamento de Estado en travel.state.gov/content/childabduction/english/country/paraguay.html .

Antisemitismo

La comunidad judía tiene menos de 1.000 miembros. Hubo informes aislados de actos antisemitas, tales como graffiti.

Trata de Personas

Ver el Informe del Departamento de Estado sobre *la Trata de Personas* en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ .

Personas con Discapacidad

La ley prohíbe nominalmente la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el transporte público, acceso a servicios de salud, o la prestación de otros servicios públicos. La ley generalmente no obliga a la accesibilidad para personas con discapacidad, y la mayoría de los edificios del país permaneció inaccesible.

En 2011 la municipalidad de Asunción aprobó una ordenanza que establece los requisitos arquitectónicos para la accesibilidad a los edificios y las aceras, así como las multas por falta de cumplimiento. Posteriormente, Asunción, San Lorenzo, y la Universidad Nacional de Asunción comenzaron a mejorar la accesibilidad de las aceras públicas y los edificios públicos. En 2012 la Dirección Nacional de Contratación Pública modificó sus bases de pliegos de licitación para incluir cláusulas para proyectos de construcción pública para proporcionar accesibilidad a personas con discapacidad. En 2013 la Municipalidad de Asunción inauguró algunos edificios públicos con rampas y baños accesibles para las personas con discapacidad. La municipalidad comenzó a incluir rampas en algunas aceras, y la policía de tránsito multó a los conductores cuyos vehículos bloqueaban el acceso a ellas. En 2013 el Poder Ejecutivo firmó la Ley de Accesibilidad al medio físico.

Muchas personas con discapacidad enfrentan una discriminación significativa en el empleo; para otras era imposible buscar empleo debido a la falta de transporte público accesible. La ley obliga la asignación de un 5 por ciento de todos los cargos públicos, aproximadamente 10.000 empleos, a las personas con discapacidad. Al 2013, los empleados públicos con discapacidad constituían menos del 1 por ciento de los empleados del sector público, o aproximadamente 1.000 empleados. Una ley de 2013 ofrece un incentivo fiscal para las empresas privadas que contratan a personas con discapacidad.

El Ministerio de Educación estima que al menos la mitad de todos los niños con discapacidad no asistió a la escuela porque los autobuses públicos no eran adecuados a sus necesidades. En 2013 el Poder Ejecutivo promulgó la ley que ordena la inclusión de estudiantes con discapacidad, tanto en los sistemas de educación pública y privada.

Los resultados preliminares del censo nacional DGEEC 2012 indicaban que el 12 por ciento de la población tenía algún tipo de discapacidad, un aumento significativo del 1 por ciento en los censos anteriores.

La Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es responsable de certificar la condición de discapacidad. No hay leyes que establecen el acceso a la información y las comunicaciones.

Minorías étnicas / raciales / nacionales

La CODEHUPY señaló que las minorías de ascendencia africana, o "afro-paraguayos", se enfrentaron a discriminación y racismo, especialmente en el acceso al empleo (véase la sección 7.d.). Un estudio de 2007 financiado por la Fundación Interamericana, la información más reciente disponible, estimó que la población afro-paraguaya era de 7640 personas.

Pueblos Indígenas

Por ley los indígenas tienen derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país; sin embargo, el gobierno no siempre protege efectivamente estos derechos. La discriminación junto con la falta de acceso al empleo, la educación, la atención de la salud, vivienda y tierra suficiente obstaculizó la capacidad de las personas indígenas de progresar económicamente, manteniendo su identidad cultural (ver sección 7.d.). El guaraní, la lengua indígena más comúnmente hablada y tradicional, es reconocida como segundo idioma oficial del país y es hablado por aproximadamente el 76 por ciento de la población, según el censo de 2002. La ley que protege los intereses de propiedad de los indígenas no siempre se respetó.

Según un censo de la DGEEC de la población indígena publicado en julio de 2013, la población indígena llegaba a 115.944, abarcando 17 grupos indígenas diferentes en 531 comunidades, 241 aldeas y 54 núcleos familiares. Un censo de 2008 estimaba que el 39 por ciento de la población indígena mayor de 15 años era analfabeto y el 48 por ciento estaba desempleado. Según la DGEEC, el ingreso promedio mensual de la población indígena en el 2008 fue de aproximadamente la mitad que el de la población no indígena. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aunque los indígenas constituían sólo el 2 por ciento de la población, la mayoría de la población era en parte de ascendencia indígena.

Las poblaciones indígenas constituían un mayor porcentaje de la población dentro de la región del Chaco, y las comunidades allí a menudo tenían más dificultades para acceder a los servicios judiciales y del gobierno y a menudo se enfrentaban con la exclusión política y económica.

Los trabajadores indígenas contratados como peones en estancias ganaban salarios bajos, trabajaban largas horas, se les pagaba con poca frecuencia o en absoluto, y carecían de beneficios médicos o de jubilación. Esta situación fue particularmente grave para las personas indígenas que participaban como jornaleros en campos y haciendas en la región del Chaco.

El INDI, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo son responsables de la protección y promoción de los derechos indígenas. INDI carecía de fondos para la compra de tierras en nombre de los indígenas y les obligaba a inscribirse para las tierras en su sede en la lejana Asunción.

La ley autoriza a las personas indígenas a determinar cómo utilizar sus tierras, llevando a muchos de ellos a transferir o alquilarlas a personas no indígenas, algunas de las cuales pescaban ilegalmente o deforestaban las tierras para plantar soja y otros cultivos comerciales. También hubo varios casos reportados de que las tierras indígenas son deforestadas ilegalmente para producir carbón vegetal. Había poca seguridad jurídica y policial contra la invasión a las tierras indígenas, y pocas comunidades indígenas tenían el título de sus tierras ancestrales. A menudo, esto dio

lugar a conflictos entre las comunidades indígenas y los grandes propietarios de tierras en las zonas rurales, que a veces se tornaban violentos.

En su visita de 2011 al país, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Kyung-wha Kang instó la aprobación de legislación para definir claramente los derechos de tierras y distribuir tierras a la población indígena. También recomendó la implementación de un proceso de consulta previa para que las comunidades indígenas sean consultadas adecuadamente antes del inicio de los proyectos extractivos y de desarrollo nacional, tales como las represas hidroeléctricas. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al país en 2012 a proteger los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con las reivindicaciones de tierras. El 1 de diciembre, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas reiteró su preocupación, pero señaló que el gobierno había progresado.

La CODEHUPY y otras ONG documentaron el tráfico generalizado de personas, violación, acoso sexual y abuso físico en las mujeres de las comunidades indígenas. Los perpetradores fueron a menudo vecinos trabajadores y empleadores de los campos y estancias.

El 25 de octubre, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía visitó el rancho de 247.105 acres de Antonella Saccarello para investigar las denuncias de abusos de derechos humanos contra los indígenas Enxet que viven en la propiedad. La líder indígena Marciana Antonia Galeano afirmó que el administrador del rancho, Carlos Reinfeld, pagaba Gs.1.500.000 (US\$ 337) a los empleados indígenas con documentos de identificación, pero sólo Gs.130.000 (US\$30) por mes a los empleados indígenas sin documentos de identificación. Galeano acusó a Reinfeld de bloquear carreteras en la propiedad y no permitir que miembros de la tribu se vayan. Galeano afirmó que la incapacidad de los miembros de la tribu de dejar la propiedad resultó en la muerte de cuatro miembros de una familia porque no pudieron acceder a atención médica. Los funcionarios del INDI alegaron que los propietarios negaron sistemáticamente el acceso a los trabajadores sociales y del censo. El administrador del rancho y el propietario negaron las acusaciones. La Fiscalía abrió una investigación, que estaba pendiente al finalizar el año.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos basados en la orientación sexual e identidad de género.

No hay leyes que prohíben explícitamente la discriminación contra las personas LGBT en el empleo, la vivienda, el acceso a la educación o la asistencia sanitaria, y todo tipo de tal discriminación, incluida la discriminación social, se produjo con frecuencia. Las penas por sexo con un menor de edad entre las edades de 14 y 16 son más severas si la víctima y el agresor son del mismo sexo. Los autores del mismo género están sujetos a un máximo de dos años de prisión; la pena máxima para los autores de distinto género es una multa. La CODEHUPY informó sobre el acoso

policial generalizado y la discriminación contra las personas LGBT (ver sección 7.d.).

La Fiscalía es responsable de investigar los casos de discriminación; Sin embargo, los agentes del gobierno a menudo la toleraban, incluyendo la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.

Panambi y otras ONG a favor de los derechos LGBT denunciaron las torturas y los asesinatos de más de 50 prostitutas transexuales entre 1989 y 2013. Panambi reportó 12 asesinatos desde 1989 hasta 1999 y 38 asesinatos desde 1999 hasta la actualidad, el más reciente fue en julio de 2013. No hubo casos reportados durante el año. Las ONG de LGBT acusaron a la Fiscalía de la realización de investigaciones superficiales que no produjeron ningún resultado tangible.

El 28 de junio, 200 defensores de los derechos LGBT en Asunción marcharon en un desfile del Día Internacional de Orgullo LGBT. No hubo informes de acoso durante el evento. El 27 de septiembre, 350 partidarios de LGBT participaron en Asunción en otra marcha en apoyo de los derechos de la familia LGBT.

El 6 de agosto, SOMOSGAY y el Comité para la Prevención y Control del VIH / SIDA en las fuerzas armadas y la Policía Nacional, un comité oficial de los militares, firmaron un acuerdo de cooperación preliminar que estipula que la ONG llevaría a cabo talleres de salud sexual, pruebas de VIH generalizadas y la formación en derechos humanos para las fuerzas armadas y personal de la policía nacional.

VIH y el SIDA Estigma Social

La CODEHUPY señaló que las personas con VIH / SIDA enfrentan discriminación, así como intimidación de la sociedad en el cuidado de la salud, la educación y el empleo. El Centro de Denuncias de VIH / SIDA y los Derechos Humanos informó que de enero a junio, recibió 112 denuncias de discriminación basada en el VIH / SIDA, para un total de 750 denuncias desde que la ONG comenzó a recoger datos. La ONG especificó que las denuncias correspondían a la discriminación basada en la orientación sexual, el estado serológico, la obligatoriedad de pruebas de VIH, identidad de género, violación del derecho a la intimidad, y el abuso de autoridad. La ONG remitió las denuncias a la Fiscalía y a la Policía Nacional para su investigación. El centro también estableció dos líneas telefónicas para recibir denuncias.

La ley prohíbe la discriminación basada en el estado serológico de SIDA VIH / y protege la privacidad de la información médica. La ley también prohíbe específicamente que los empleadores discriminen o acosen a los empleados en función de su estado serológico. Una norma del Ministerio de Trabajo del 2009 prohíbe a los empleadores exigir la prueba del VIH antes de la contratación, pero muchas empresas lo hicieron. Al 04 de noviembre, la clínica de salud de

SOMOSGAY hizo la prueba y proporcionó sesiones de asesoramiento privado a 2.316 hombres y 2.007 mujeres, frente a 650 personas en 2013.

Sección 7. Derechos de los Trabajadores

a. La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva

La ley, incluyendo las regulaciones relacionadas e instrumentos legales, establece el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos independientes (con la excepción de las fuerzas armadas y la policía), hacer contratos colectivos, y llevar a cabo huelgas legales. La ley prohíbe el arbitraje vinculante y el castigo en contra de organizadores sindicales y huelguistas. La ley prohíbe la discriminación antisindical, pero no requiere el reintegro de los trabajadores despedidos por actividad sindical.

Hay varias restricciones a estos derechos. Por ejemplo, la ley requiere que los sindicatos industriales tengan un mínimo de 300 miembros para el registro, un requisito considerado excesivo para los estándares internacionales. Todos los sindicatos deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo, un proceso engorroso. Por otra parte, los empleadores pueden presentar un recurso de oposición al registro, lo que puede retrasar el reconocimiento. Los trabajadores no pueden ser miembros de más de un sindicato, incluso si tienen más de un contrato de trabajo a tiempo parcial. Las huelgas están limitadas a fines directamente relacionados con las ocupaciones de los trabajadores. Los candidatos a cargos sindicales deben trabajar para una empresa y ser miembros activos del sindicato.

El 1 de enero fue creado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que divide efectivamente el Ministerio de Justicia y Trabajo en dos entidades separadas. Un Ministro de Trabajo asumió el cargo en enero y fue nombrado formalmente el 3 de abril. El ministerio es responsable de hacer cumplir los derechos laborales, el registro de los sindicatos, la mediación en los conflictos, y la supervisión de los programas de seguridad y de jubilación social. A partir de noviembre, el ministerio firmó 33 convenios de cooperación interinstitucional con otras agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas.

Hubo pocas sanciones efectivas y disuasivas, multas, o recursos contra la discriminación antisindical. Las inspecciones de discriminación antisindical para proteger los derechos laborales eran poco frecuentes, sufrieron de insuficiencia de recursos, y se dice que ocurrieron sólo si lo requería la parte agraviada. El ministerio no tiene jurisdicción para iniciar o participar en un litigio contra los sindicatos. Los empleadores que no reconocen o trabajan colectivamente para negociar con los sindicatos legalmente registrados se enfrentan a multas de sólo 50 jornales, aproximadamente Gs. 3,2 millones (US\$ 720). Los empleadores que ponen en una lista negra a los empleados se enfrentan a multas de sólo 30 jornales, o

aproximadamente Gs. 1,9 millones (US\$ 430). Estas sanciones no fueron suficientes para disuadir las violaciones.

El gobierno no siempre hizo cumplir efectivamente la ley, a menudo para evitar represalias por parte de los empresarios que tomaron acción contra los huelguistas y líderes sindicales. Las sanciones por violaciones incluyen multas que van desde 10 días hasta 30 días de jornales, o aproximadamente Gs. 640.000 a Gs. 1,9 millones (US\$ 145- \$ 430) por cada trabajador afectado y era insuficiente para disuadir las violaciones. Los procedimientos administrativos y judiciales fueron objeto de largas demoras, mal manejo de los casos y corrupción. El Ministerio de Trabajo intervino a menudo, a petición de las partes, como árbitro voluntario en los conflictos laborales.

Aunque el proceso formal de registro de sindicato a menudo tomó más de un año, el ministerio típicamente emitió registros provisionales dentro de las semanas de aplicación para permitir a los sindicatos que operen. Los sindicatos con inscripciones provisionales tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás sindicatos.

La libertad de asociación y el derecho al contrato colectivo no siempre se respeta. Las asociaciones de empleadores influenciaban fuertemente a algunos sindicatos del sector privado. Los dirigentes de varios sindicatos que representan a empleados del sector público tenían vínculos con los partidos políticos y el gobierno. El gobierno fue capaz de disuadir a varios sindicatos del sector público de la participación en una huelga general en marzo.

Hubo discriminación antisindical. Los organizadores sindicales experimentaron acoso y despido por actividades sindicales, y algunos trabajadores optaron por no protestar por temor a represalias o expectativas de inacción del gobierno.

El 28 de agosto, la policía hirió a varios dirigentes sindicales durante una manifestación para pedir mejores salarios y la asignación de un 7 por ciento del producto interno bruto a la educación en el presupuesto de gastos generales de la nación. La Confederación Sindical Internacional denunció la violencia en lo que calificó como una manifestación pacífica, e instó al presidente a salvaguardar la salud de los dirigentes sindicalistas heridos.

Mientras que los trabajadores sindicalizados del acero y las industrias marítimas estaban sindicalizados y con frecuencia recibieron protecciones legales pertinentes, la mayoría de los trabajadores, incluidos los agricultores, ganaderos y trabajadores del sector informal, no participaron en los sindicatos. Muchos de estos trabajadores eran miembros de movimientos campesinos.

Hubo una huelga general el 26 de marzo compuesta de participantes de varios sindicatos de trabajadores, organizaciones de agricultores y otros movimientos sociales. La huelga fue pacífica y no hubo informes de violencia. Los trabajadores pidieron nuevos aumentos en el salario mínimo y la derogación de la Ley de

Asociaciones Público-Privadas, entre otras exigencias. El Ministerio de Trabajo abrió comisiones de diálogo con varios sindicatos. El 28 de febrero, el salario mínimo se incrementó en un 10 por ciento.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. El gobierno no hizo cumplir la ley efectivamente. El Ministerio de Trabajo no realizó inspecciones enfocadas exclusivamente en el trabajo forzoso y carecía de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, sobre todo en zonas remotas donde era más común este tipo de trabajo. Las sanciones por violaciones incluyen hasta 20 años de prisión. El cumplimiento mínimo y las sanciones no fueron suficientes para disuadir las violaciones.

La comisión del gobierno de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso celebró tres reuniones formales en Asunción y organizó tres audiencias públicas con las comunidades indígenas en el Chaco y en Itapúa para solicitar retroalimentación sobre su Estrategia Nacional de Lucha contra el trabajo forzoso. La comisión firmó un acuerdo interinstitucional con el INDI y presentó una solicitud a la Corte Suprema para la creación de tribunales especializados en conflictos laborales en el Chaco. En 2013 el Poder Judicial creó jurisdicciones laborales en Filadelfia y Villa Hayes en el Chaco, pero las instalaciones judiciales todavía no se habían construido en estas ciudades.

El trabajo forzoso se produjo. Organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas, CUT-A (Central Unitaria de Trabajadores, un sindicato nacional) y la Organización Internacional del Trabajo denunciaron casos de trabajadores indígenas en la región del Chaco que trabajan bajo condiciones de trabajo forzado o atado a una deuda en casi esclavitud. También hubo informes de que las organizaciones de tráfico de drogas en el departamento de Amambay reclutaron a trabajadores indígenas para el trabajo forzoso de procesamiento de hojas de marihuana. A los trabajadores, o bien no se les pagaba, o se les pagaba en especie con alimentos de calidad inferior, o se les hacía incurrir en deudas para adquirir bienes de alto precio en almacenes de la empresa.

Para septiembre la oficina regional del Ministerio de Trabajo en el Chaco había recibido 56 denuncias por despido injustificado, falta de pago del salario mínimo, y otras violaciones laborales. Un informe del ministerio destacó el esfuerzo de los jueces locales en Irala Fernández y Loma Plata para combatir y prevenir el trabajo forzoso de los trabajadores indígenas en el Chaco. El ministerio no confirmó casos de esclavitud por deudas en la región del Chaco, pero no descartó la posibilidad de que seguía existiendo. Esta situación fue grave para las mujeres en el servicio doméstico, muchas de las cuales no fueron compensadas por su trabajo y enfrentan diferentes tipos de abuso. Hubo algunos informes de trabajo infantil forzado, sobre todo en el servicio doméstico (ver sección 7.c.).

Un informe de 2013 de la Walk Free Foundation estimó que había 19.600 personas en el país que viven en condiciones de esclavitud moderna, que se define por la ONG como "trabajo forzado procedente de la deuda, víctimas de trata y matrimonios forzados."

Ver también el Informe Anual del Departamento de Estado sobre *la Trata de Personas* en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ .

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo

La edad mínima para el empleo a tiempo completo es de 18 años de edad. Los adolescentes entre las edades de 14 y 17 años pueden trabajar si tienen una autorización escrita de sus padres, asisten a la escuela, no trabajan más de cuatro horas al día, ni más de un máximo de 24 horas por semana. Los adolescentes entre las edades de 16 y 18 años que no asisten a la escuela pueden trabajar hasta seis horas al día, con un límite máximo semanal de 36 horas. La ley también permite "trabajo liviano" para niños entre las edades de 12 y 14. El gobierno no había adoptado normas que rijan la naturaleza y condiciones del trabajo liviano permitido para niños.

El gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes que protegen a los niños contra la explotación en el lugar de trabajo. El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil, y la Fiscalía de procesar a los infractores. La Defensoría del Pueblo y el Comité de los Derechos del Niño reciben denuncias y las remiten a la Oficina del Procurador General. A partir del 1 de noviembre, el comité en Asunción y cinco ciudades vecinas registraron 201 denuncias de trabajo infantil.

La máxima sanción administrativa para el empleo de un menor de 14 años de edad es de Gs. 3,25 millones (US\$ 730). La ley estipula que los empleadores que contratan a adolescentes entre las edades de 14 y 17 en condiciones peligrosas deben pagar la máxima sanción administrativa prevista. Las sanciones por emplear a personas en condiciones peligrosas o coaccionar a las personas que trabajan va de tres a cinco años de prisión, pero fueron insuficientes para disuadir las violaciones.

La Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación de Niños del país trabajó para eliminar el trabajo infantil explotador, aumentando la conciencia, la mejora de la protección legal y las políticas públicas y la implementación de sistemas de monitoreo; Sin embargo, la insuficiencia de recursos limitó la eficacia de estos esfuerzos.

En los primeros seis meses del año, el Ministerio de Trabajo recibió 32 denuncias de trabajadores infantiles y adolescentes, de los cuales cuatro eran de niños trabajadores de entre 13 a 15 y 28 de los trabajadores infantiles tenían entre 16-17; 22 de los afectados eran niños, y 10 eran niñas. La mayoría de estos niños trabajadores se desempeñan como obreros metalúrgicos o cajeros, en ventas, como ayudantes, y en

otros trabajos de servicio. El noventa por ciento de las violaciones laborales denunciadas tenían que ver con el despido del trabajo.

La Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia siguió administrando el programa "Abrazo" para ayudar a las familias con niños en riesgo de trabajar en las calles, que para noviembre contaba con 11.288 niños, entre ellos 2.316 niños de hasta cinco años de edad. El programa cubre 29 distritos en 11 departamentos e incluía 41 centros de servicio. El programa también incluyó transferencias monetarias para 12.666 niños y entregas de alimentos en especie para otros 7.406 niños. Otros 2.800 niños recibieron suplementos nutricionales y otros tipos de asistencia. Programas de la Operación Verano de la SNNA ingresaron a 2.600 hijos de trabajadores de la calle a los refugios durante las vacaciones escolares.

La Secretaría de Acción Social administra el programa de Bienestar (Tekoporá) que pagó (incluidos los de los niños que trabajan) un estipendio mensual a los padres para la escolarización de sus hijos, las vacunas y los controles de salud regulares. A partir de octubre, 81.741 familias, para un total de 446.095 personas, fueron asistidas por el programa, incluyendo 203.498 niños y adolescentes.

La secretaría también tuvo otro programa social llamado Tekoha, que proporcionó ayuda de vivienda para familias de escasos recursos y sus hijos. A partir de octubre el programa asistió a 12.907 familias en 44 distritos en 12 departamentos y Asunción.

El trabajo infantil es un problema, sobre todo en la industria del azúcar, ladrillo, la fabricación de cal, el servicio doméstico, y los sectores agrícolas. Un estudio de 2011 sobre el trabajo infantil en el sector de la caña de azúcar estima que los niños constituyen más del 25 por ciento de la fuerza laboral de ese rubro, y aproximadamente uno de cada cuatro de esos niños sufrió un promedio de dos lesiones al año. En 2012, la SNNA dio a conocer los resultados de su primer y último estudio nacional sobre el trabajo infantil, que abarcó las ciudades de Concepción, Vallemí y Tobatí donde prevalecía el trabajo infantil. El informe concluyó que el 62 por ciento de los niños en Vallemí comenzó a trabajar entre las edades de siete y doce, el 55 por ciento de los niños en Concepción comenzó a trabajar entre las edades de nueve y once, y el 62 por ciento de los niños en Tobati comenzó a trabajar entre los cuatro y seis años de edad.

Los niños, sobre todo los varones, también trabajaron en el sector agrícola (incluyendo la caña de azúcar, algodón, porotos, soja, sésamo, trigo, maní, y la producción de mandioca) y en negocios gastronómicos y otras industrias de servicios. Los niños también trabajaron como vendedores en los mercados. De acuerdo con UNICEF y la SNNA, se estima que 46.000 niños, sobre todo niñas, trabajan en el servicio doméstico y ninguna recibió un sueldo. A cambio de trabajo, los empleadores prometieron a los niños trabajadores domésticos alojamiento, comida y apoyo financiero para la escuela. Algunos de estos niños fueron víctimas de trabajo forzoso, no recibieron pago o los beneficios prometidos a cambio del trabajo, fueron

a veces sometidos a la explotación sexual, y a menudo carecían de acceso a la educación.

Han ocurrido las peores formas de trabajo infantil, donde niños desnutridos, maltratados, o abandonados trabajaban en condiciones insalubres y peligrosas en la venta de bienes o servicios en la calle, trabajando en fábricas, o cosechando cultivos. Se usaron, comerciaron y ofrecieron niños a terceros para actividades ilícitas, incluyendo la explotación sexual comercial (ver también la sección 6, Niños), a veces con el conocimiento de los padres y tutores, que recibieron una remuneración a cambio. Algunos menores de edad trabajaban como contrabandistas de drogas a lo largo de la frontera con Brasil, como parte de los grupos criminales.

Ver también *Conclusiones sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil* del Departamento de Trabajo en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. La discriminación en materia de empleo o de ocupación

El Código Laboral prohíbe específicamente la discriminación por motivos de raza, color de piel, sexo, religión, afiliación política o condición social. Otra legislación prohíbe la discriminación basada en la discapacidad y el estado del VIH. Las leyes y los reglamentos exigen que el cinco por ciento de los empleados públicos sean personas con discapacidad. Estas leyes y regulaciones a menudo no se cumplen. Existe legislación que prohíbe la discriminación laboral basada en la orientación sexual, idioma, o la portación de una enfermedad contagiosa.

La discriminación laboral se produjo sobre todo en lo que respecta al sexo, raza, discapacidad, idioma, orientación sexual, estado seropositivo, y el embarazo. La discriminación en el empleo se produjo en relación con las mujeres, los grupos indígenas, los afro-paraguayos y las personas LGBT (ver sección 6). Las pruebas y discriminación por enfermedades contagiosas y el VIH eran común.

La discriminación contra los trabajadores domésticos era común. Los trabajadores domésticos tenían menos protecciones legales, salarios inferiores y peores condiciones de trabajo. Los trabajadores migrantes indocumentados procedentes de Brasil y de otros países que trabajan en el sector de servicios en Ciudad del Este sufrieron discriminación. Los travestis enfrentan discriminación laboral grave, incluso de otras personas LGBT, y muchos se dedican a la prostitución como resultado.

e. Condiciones aceptables de trabajo

El 28 de febrero, el salario mínimo nacional obligatorio aumentó a aproximadamente Gs. 1,8 millones (US\$ 305) por mes. Según las encuestas de la DGEEC, el ingreso mensual per cápita fue de aproximadamente Gs. 970.000 (US\$ 218). De acuerdo con un estudio la DGEEC 2011, el último, el nivel de ingresos de las personas de escasos

recursos era de Gs. 438.954 (US\$ 99) por mes, y el nivel de ingresos de la pobreza extrema era Gs. 284.088 (US\$ 64 dólares) por mes. La ley discrimina a los trabajadores domésticos, que están legalmente autorizados a sólo el 40 por ciento del salario mínimo, y considera que la vivienda y los alimentos cuentan como salario de un trabajador doméstico.

La ley establece una semana de trabajo estándar de 48 horas (42 horas para trabajo nocturno), con un día de descanso. La ley también exige el pago de por lo menos una bonificación anual de un mes de salario y un mínimo de 12 días y un máximo de 30 días de vacaciones al año, dependiendo del total de años de servicio. La ley exige el pago de las horas extraordinarias. No hay prohibiciones o excepciones para horas extras obligatorias excesivas. Los trabajadores domésticos sufrieron discriminación, trabajaban habitualmente jornadas de 12 horas, no tenían derecho al pago de horas extras, descansaban un solo día a la semana, no tenían derecho a las prestaciones de jubilación provistas públicamente, y no alcanzan la estabilidad laboral después de 10 años, a diferencia de otros trabajadores cubiertos por el Código Laboral. Los trabajadores domésticos podían recibir atención médica y medicamentos recetados a través de pequeñas contribuciones de su salario y de sus empleadores.

El 25 de agosto, el Ministerio de Trabajo creó la Dirección de Promoción de la Mujer Trabajadora. Su Centro de Atención a Trabajadoras Domésticas recopila estadísticas y proporciona servicios para los trabajadores domésticos. A partir de septiembre, el centro recibió 342 denuncias de los trabajadores domésticos contra sus empleadores y fue capaz de resolver 119 de las mismas. La dirección tomó la delantera en convocar a la Comisión Nacional Tripartita para la Igualdad de Oportunidades para promover la participación de las mujeres en el trabajo, en gran parte inactiva desde su creación en 1998. El 7 de noviembre, la comisión tripartita celebró su primera reunión con representantes de organizaciones no gubernamentales y sindicatos.

El gobierno establece las normas de salud y seguridad ocupacional adecuadas que estipulan las condiciones de seguridad, higiene y comodidad. Aunque estas normas estaban vigentes y eran apropiadas para las principales industrias, la aplicación era inadecuada.

El Ministerio de Trabajo no hizo cumplir efectivamente las disposiciones para el pago de horas extras, el salario mínimo, o limitaciones de horas de trabajo en el sector formal o informal. El Ministerio de Salud no hizo cumplir efectivamente las normas de seguridad y salud en el trabajo.

El Ministerio de Trabajo empleó sólo 28 inspectores laborales en Asunción y nueve para las oficinas regionales. Según el Ministerio, 20 inspectores de trabajo se enfrentaron a las investigaciones internas por corrupción, negligencia, y otros cargos. En 2013 se suspendieron las inspecciones hasta que la unidad de inspecciones fue reformada y reestructurada, lo que resultó en una disminución significativa del número de inspecciones realizadas.

El ministerio no tiene vehículos suficientes para hacer cumplir las leyes laborales en áreas remotas. La ley estipula una multa de 30 jornales para un empleador que paga por debajo del salario mínimo, pero las acciones del gobierno para prevenir violaciones se limitan a las campañas de información. Las sanciones no fueron suficientes para disuadir el incumplimiento.

A septiembre, el Departamento de Mediación de Conflictos Privados del ministerio recibió 6.262 denuncias laborales y solicitudes de mediación. 67 por ciento de las denuncias fueron presentadas por hombres. La mayoría de las denuncias se registraron en enero, con 973 de ellas principalmente por el incumplimiento del pago del aguinaldo.

Los empleadores están obligados a registrar a los trabajadores con el Ministerio de Trabajo. Para octubre, 2.693 empleadores registraron a 9.632 trabajadores con el Ministerio de Trabajo, con un promedio de 269 empleadores registrando por mes.

Los trabajadores de la economía informal no recibieron las protecciones sociales de la legislación laboral. La DGEEC estima que el porcentaje de trabajadores que recibieron el salario mínimo o más se redujo de 72,3 por ciento en 2013 a 68,9 por ciento durante el año. Muchos empleadores violan las disposiciones que exigen el pago de horas extras, sobre todo en los rubros de gastronomía, agricultura y los servicios domésticos. El Programa de Desarrollo de las NNUU de 2013, Desarrollo Humano y Seguridad Social, concluyó que el 81,3 por ciento de la fuerza laboral (2.370.677) trabajó en empleos informales y no disfrutó de los beneficios de jubilación o de salud. Según una encuesta de 2013 realizada por la DGEEC, había aproximadamente 107.243 trabajadores domésticos, la mayoría de ellos mujeres.

La información sobre los accidentes laborales recientes o accidentes industriales no estaba disponible.

Los trabajadores podrían retirarse de situaciones que ponían en peligro su salud y seguridad, pero esto podría poner en peligro su empleo. Las autoridades a veces intervinieron para proteger a los empleados de esta situación.